

# Educación, Inserción Productiva y Migración de los Jóvenes Rurales

Por:  
Jean Paul Hernández Ruiz



**La relación entre educación, inserción productiva y migración juvenil rural: mecanismos desde la literatura económica.**

Jean Paul Hernández Ruiz  
Trabajo de Grado

Asesor  
Andrés Felipe Sánchez Saldarriaga, PhD

Maestría en Economía Aplicada  
Universidad EAFIT

Enero 2026

## Resumen

Este trabajo examina la relación entre educación, inserción productiva y migración juvenil rural a partir de los mecanismos identificados en la literatura económica. Sistematiza y compara los canales teóricos y empíricos mediante los cuales la educación influye sobre las trayectorias laborales de los jóvenes rurales y su propensión a migrar. El marco teórico integra aportes de la economía laboral y del desarrollo económico, incluyendo los modelos de búsqueda y emparejamiento de empleo, la economía dual y la migración rural-urbana, la teoría del capital humano y la literatura sobre transformación estructural y reasignación sectorial. A partir de este marco, se revisa evidencia empírica para América Latina, con énfasis en Colombia, que sugiere que mayores niveles de educación se asocian con una menor dependencia del empleo agrícola de baja productividad, mayores probabilidades de inserción en el empleo rural no agrícola más productivo, y una ampliación de las oportunidades de emprendimiento y arraigo territorial. Sin embargo, la literatura también documenta fuertes restricciones estructurales, que limitan el potencial de la educación como mecanismo para reducir la migración juvenil rural. El estudio concluye destacando la heterogeneidad de estos mecanismos entre contextos urbanos y rurales y señalando oportunidades de investigación futura orientadas a establecer relaciones causales y diseñar modelos de inserción productiva rural basados en evidencia.

**Palabras clave:** juventud rural; inserción productiva; migración rural-urbana; capital humano; educación; economía rural.

## Abstract

This study examines the relationship between education, productive inclusion, and rural youth migration through the mechanisms identified in the economic literature. It systematizes and compares the theoretical and empirical channels through which education influences rural youths' labor trajectories and their propensity to migrate. The theoretical framework integrates contributions from labor and development economics, including job search and matching models, dual economy and rural-urban migration theories, human capital theory, and the literature on structural transformation and sectoral reallocation. Based on this framework, the study reviews empirical evidence from Latin America, with a particular focus on Colombia, suggesting that higher levels of education are associated with lower dependence on low-productivity agricultural employment, higher probabilities of insertion into more productive rural non-agricultural employment, and expanded opportunities for entrepreneurship and territorial attachment. However, the literature also documents strong structural constraints, that limit the potential of education as a mechanism for reducing rural youth migration. The study concludes by highlighting the heterogeneity of these mechanisms across urban and rural contexts and by identifying avenues for future research aimed at establishing causal relationships and designing evidence-based models of rural productive inclusion.

**Keywords:** rural youth; productive inclusion; rural-urban migration; human capital; education; rural economy.

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. Introducción.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Aproximación teórica a la inserción productiva y la migración de los jóvenes rurales.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. La teoría del Desempleo o Modelo DMP .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. La economía dual y la migración rural - urbana .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. La teoría de acumulación del capital humano .....</b>	<b>10</b>
<b>3. La economía rural en Colombia.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Aproximaciones empíricas a la educación, la inserción productiva y la migración juvenil rural.....</b>	<b>14</b>
<b>4.1. El rol de la inserción productiva de los jóvenes rurales en la migración rural-urbana.....</b>	<b>16</b>
La migración como un fenómeno económico .....	20
<b>4.2. Determinantes de la inserción productiva de los jóvenes rurales: el papel de la acumulación de capital humano en el empleo y el emprendimiento</b>	<b>22</b>
Habilidades y competencias individuales o Capital Humano (KH) .....	25
<b>5. Barreras y evidencia empírica que afecta los mecanismos que relacionan la educación, la inserción productiva y la migración.....</b>	<b>34</b>
<b>5.1. Factores socioeconómicos y demográficos .....</b>	<b>38</b>
<b>5.2. Factores de empleabilidad externa .....</b>	<b>39</b>
<b>5.3. Diferencias entre el potencial de inserción productiva de los jóvenes urbanos y los rurales, y la heterogeneidad.....</b>	<b>41</b>
<b>6. Mapa relacional de teoría económica, evidencia empírica y los mecanismos .....</b>	<b>44</b>
<b>7. Conclusiones.....</b>	<b>45</b>
<b>8. Referencias .....</b>	<b>47</b>
Normatividad revisada .....	53

## **LA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN, INSERCIÓN PRODUCTIVA Y MIGRACIÓN JUVENIL RURAL: MECANISMOS DESDE LA LITERATURA ECONÓMICA.**

### **1. INTRODUCCIÓN**

En Colombia los jóvenes rurales se enfrentan a diferentes desafíos para su inserción productiva, debido a condiciones estructurales que articulan dimensiones económicas, educativas, demográficas, geográficas, entre otras, y cuyos efectos se manifiestan tanto en la movilidad social individual como en la sostenibilidad de los territorios no urbanos. Las oportunidades laborales locales son escasas, y quienes logran emplearse lo hacen mayoritariamente en condiciones de informalidad. En Colombia, la informalidad laboral alcanza el 85.4% en el sector agrícola (Díaz Baca et al., 2024), y es significativamente más alta en las áreas rurales (84% en 2021) que en las urbanas (63%) (OECD, 2022).

La evidencia empírica ha mostrado que este fenómeno opera en un entorno marcado no sólo por pocas oportunidades laborales, sino por mercados locales de baja productividad y una fuerte dependencia del empleo informal y precario, condiciones que deterioran las trayectorias de vida de la juventud y erosionan la base productiva rural (Díaz Baca et al., 2024). Estas dinámicas se entrelazan con procesos migratorios persistentes, motivados por desigualdades territoriales, insuficiencia de servicios y una percepción generalizada de progreso asociada a la salida del territorio (Erazo-Borrás et al., 2022). La consecuencia es un vaciamiento generacional que compromete la continuidad de la producción agrícola, limita el potencial de diversificación económica e intensifica las brechas educativas y laborales entre lo urbano y lo rural (White, 2012).

Según el Banco Mundial (2025), la población rural del mundo como porcentaje de la población total se redujo del 66% en 1960 a menos del 42% en el 2024, viendo por primera vez una caída en el tamaño de la población en 2021, cuando fueron cerca de 3,45 mil millones, comparado con 3,46 mil millones en 2020. En Colombia, esta caída fue del 54% al 17% en 2024, mostrando un paso significativamente más acelerado que el resto del mundo y principalmente motivado por la violencia y falta de oportunidades económicas (Díaz Baca et-al. 2024). Por datos del DANE (2020), 23,8% de la población rural del país son jóvenes rurales entre 14 y 28 años, y estos poco más de 2 millones de jóvenes se distribuyen de forma inequitativa en el 85% del territorio colombiano, considerado rural.

La región latinoamericana presenta un patrón similar: los jóvenes rurales experimentan mayores niveles de desempleo, subempleo y pobreza que los adultos, y enfrentan condiciones

más desfavorables que sus pares urbanos (White, 2012). Incluso cuando acceden al Empleo Rural No Agrícola (ERNA), los jóvenes con bajo capital humano suelen insertarse en actividades consideradas “de refugio”, caracterizadas por baja productividad y remuneración inestable, sin perspectivas de crecimiento (Köbrich y Dirven, 2007). Aun así, la agricultura continúa empleando a la mayoría de la fuerza laboral rural, pero con salarios promedio limitados y restricciones estructurales para aumentar la productividad (Díaz Baca et al., 2024).

La inserción productiva juvenil rural se encuentra condicionada por interacciones complejas entre empleo, migración y educación, en un entorno de precariedad institucional y desigualdad territorial. Las oportunidades locales insuficientes, la migración como mecanismo de supervivencia y la falta de pertinencia de la educación componen un sistema que impide la transformación estructural de la economía en el largo plazo, es decir, el cambio de la composición económica que moviliza recurso humano de sectores de baja productividad como la agricultura a sectores más especializados como manufactura o tecnología, dada la incapacidad de acumulación de capital humano en los territorios rurales (Herrendorf y Schoellman, 2018).

Los modelos educativos vigentes no emplean metodologías con evidencia de impacto que respondan integralmente a las necesidades y aspiraciones de la juventud rural. Por ello, esta investigación busca sistematizar información sobre la pregunta: ¿Qué mecanismos identifica la literatura para explicar el papel de la educación en la inserción productiva de los jóvenes rurales y cómo estos mecanismos se relacionan con su propensión a migrar?. Con esto, el propósito de esta revisión de literatura es identificar, sistematizar y comparar los mecanismos propuestos por la literatura para explicar cómo la educación se relaciona con las trayectorias laborales de los jóvenes rurales y con su propensión a migrar. En consecuencia, los resultados son una síntesis estructurada de mecanismos y determinantes.

Este documento se compone de una revisión a aproximaciones teóricas y sus respectivas actualizaciones de papers seminales sobre empleo, con la teoría de emparejamiento del empleo de Mortensen y Pissarides (1994); economía dual y migración rural urbana, con las teorías de Lewis y Harris-Todaro; de capital humano, con Becker (1993) y Heckman (2008; 2014); y transformación estructural, barreras de capital humano y empleabilidad juvenil, de Herrendorf y Schoellman (2018), y Porzio et al. (2021). A partir de este marco, se articula evidencia empírica que conecta la teoría con estudios realizados en América Latina, priorizando aquellos con resultados en Colombia sobre migración rural urbana, retos para la inserción productiva, y determinantes de la inserción de los jóvenes rurales.

Tras esta introducción, el capítulo 2 desarrolla el marco teórico desde la economía laboral y del desarrollo. Posteriormente, el capítulo 3 presenta una caracterización de la economía rural colombiana, orientada a identificar su tamaño y estructura productiva. Este análisis sirve de base para el capítulo 4, que revisa evidencia empírica de la teoría del capítulo 2 aplicada a América Latina y, en particular a Colombia, con el fin de identificar los mecanismos que vinculan la educación con la inserción productiva y la migración de los jóvenes rurales. En el capítulo 5, se examina la evidencia empírica sobre las barreras y otros factores que influyen en estos mecanismos. El capítulo 6 presenta un síntesis gráfica de los mecanismos identificados y la relación que guardan con los determinantes y condicionantes teóricos. El documento concluye con una sección de conclusiones y la identificación de posibles líneas de investigación futura.

## **2. APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA INSERCIÓN PRODUCTIVA Y LA MIGRACIÓN DE LOS JÓVENES RURALES**

Este capítulo desarrolla una revisión de literatura económica sobre empleo, mercados laborales rurales y empleo juvenil rural, con énfasis en marcos conceptuales provenientes de la economía laboral y la economía del desarrollo. Esta revisión buscó concentrar teoría económica que priorizara modelos de empleabilidad, que más que explicar el funcionamiento del empleo agrícola, propusieran modelos abstractos que pudieran abordar la complejidad de los mercados laborales rurales. Es por esto que se aplican modelos como el de economía dual para describir dos sectores y actualizaciones modernas para incluir la informalidad y la heterogeneidad. De forma amplia, para comprender los mecanismos que vinculan educación, inserción productiva y migración, se contemplan teorías provenientes de distintas corrientes económicas.

### **2.1. La teoría del Desempleo o Modelo DMP**

Mortensen y Pissarides (1994) desarrollaron conjuntamente el modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) a través de trabajos desde 1970. Funciona como marco teórico funcional para comprender el desempleo de forma aplicable a la ruralidad, pues explica la existencia de desempleo aún con la existencia de vacantes, dada la presencia de fricciones en el mercado laboral como la desalineación de oferta y demanda de trabajo, tanto en habilidades como en lugares. A diferencia de los modelos neoclásicos donde los mercados se vacían instantáneamente, el DMP asume que el intercambio de trabajo es una actividad que consume tiempo y recursos.

El modelo postula que el mercado laboral está caracterizado por desajustes espaciales y de habilidades que llama fricciones. Para formalizar esto, utiliza una función de emparejamiento o matching que determina el número de contrataciones en función del número de desempleados y de vacantes disponibles. En esto, contempla la fricción del mercado, que mide qué tan "apretado" está: cuando hay muchas vacantes para pocos desempleados, la probabilidad de que un trabajador encuentre empleo sube, pero la probabilidad de que una empresa llene una vacante baja.

A su vez, describe una relación inversa entre el desempleo y las vacantes, conocida como la Curva de Beveridge. En un estado estacionario, el flujo de personas que entran al desempleo (por destrucción de empleos) debe ser igual al flujo de personas que salen (por nuevas contrataciones). Si la eficiencia del emparejamiento mejora, la curva se desplaza hacia el origen, indicando menos desempleo para un mismo nivel de vacantes.

En este marco, los salarios no se determinan por oferta y demanda agregada, sino mediante una negociación bilateral, o negociación de salarios de Nash (Nash Bargaining). Debido a las fricciones, cuando un trabajador y una empresa se encuentran, se crea un excedente o renta (surplus), ya que ambos se ahorran los costos de seguir buscando. El salario se fija para dividir este excedente en proporciones fijas basadas en el poder de negociación de cada parte.

La existencia de las vacantes depende de dos elementos:

- **Creación de empleo:** Las empresas abren vacantes basándose en una condición de libre entrada, lo que significa que publicarán ofertas hasta que el valor esperado de una vacante sea igual a cero (los costos de reclutamiento igualan los beneficios esperados del puesto lleno).

- **Destrucción de empleo:** En las extensiones del modelo, la destrucción puede ser endógena. Cada puesto tiene una productividad específica que puede verse afectada por choques idiosincrásicos. Si la productividad cae por debajo de un "nivel de reserva", la empresa decide destruir el empleo porque ya no es rentable mantenerlo.

No obstante, El modelo demuestra que el equilibrio del mercado laboral suele ser ineficiente debido a las externalidades de búsqueda (por ejemplo, una empresa adicional que publica una vacante hace que sea más difícil para otras empresas encontrar trabajadores).

La implicación del modelo DMP es que en los territorios rurales el mercado laboral tendrá fricciones que impiden la ocupación completa de las personas en edad de trabajar que los habitan, dado que, ante la existencia de mercados pequeños, la tasa de apertura de vacantes será menor, y el proceso de matching entre las personas con las habilidades que las empresas requieran con las vacantes abiertas, o incluso la misma presencia de estas personas en los

lugares donde las empresas habilitan las ofertas, se hace menos probable, lo que genera mayores ineficiencias en el proceso de matching, y genera un desempleo friccional alto, aún ante la presencia de numerosas vacantes.

## **2.2. La economía dual y la migración rural - urbana**

El modelo de economía dual de Lewis (1954) constituye uno de los marcos teóricos más influyentes para analizar la relación entre migración y crecimiento en países en desarrollo. Bhattacharya (1993) sintetiza sus rasgos centrales a partir de una estructura dual de la economía, compuesta por un sector tradicional agrícola y un sector moderno industrial. En el primero, Lewis asume un excedente de mano de obra rural cuya productividad marginal es cercana a cero. Los trabajadores agrícolas, organizados en unidades familiares, no reciben salarios equivalentes a su productividad marginal, sino a su producto promedio, lo que mantiene la existencia de salarios de subsistencia. El sector moderno puede entonces absorber trabajadores del campo ofreciendo un salario ligeramente superior, enfrentando una oferta de trabajo perfectamente elástica. En este esquema, la migración es concebida como un proceso funcional al desarrollo económico, que se mantiene hasta que el excedente de mano de obra rural se agota.

Los modelos de Todaro (1969) y Harris-Todaro (1970) contrarios a la visión de Lewis, sostienen que la migración persiste incluso en presencia de altos niveles de desempleo urbano. Su premisa es que la decisión de migrar no depende del salario urbano vigente, sino del ingreso urbano esperado, definido como el salario del sector moderno ponderado por la probabilidad de obtener un empleo. El modelo de Harris-Todaro introduce, además, un salario mínimo urbano fijado institucionalmente, superior al salario de equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando el ingreso esperado en la ciudad, ajustado por el riesgo de desempleo, se iguala al ingreso rural real. Esto podría explicar la existencia persistente de una “cola” de desempleados urbanos.

Chaudhuri (2024) destaca un resultado contraintuitivo en los modelos Todaro y Harris-Todaro, conocido como la paradoja de Todaro. Cuando el Estado crea empleos en el sector moderno con el objetivo de reducir el desempleo urbano, puede inducir un aumento del desempleo total, ya que la mayor probabilidad percibida de encontrar trabajo incentiva una migración desde el campo que supera el número de puestos creados. De este modo, sugiere que las políticas de creación directa de empleo pueden resultar ineficaces si no consideran los efectos migratorios inducidos, lo que ha llevado a proponer combinaciones de subsidios salariales y

restricciones a la migración como respuestas teóricas al problema, limitando la movilidad rural-urbana.

Desarrollos posteriores, también revisados por Chaudhuri (2024), han refinado estos modelos incorporando nuevos elementos. Entre ellos se encuentra la introducción del sector informal urbano, propuesta por Fields (1975) y Mazumdar (1975), como una alternativa intermedia en la que los migrantes se insertan mientras buscan empleo formal. Asimismo, se debate si la migración es predominantemente especulativa “a la aventura”, o si, como sugieren evidencias más recientes, los migrantes prefieren asegurar un empleo antes de desplazarse. Otra crítica relevante a los modelos originales de Harris-Todaro es la ausencia de heterogeneidad entre los trabajadores, dado que los migrantes tienden a presentar mayores niveles de educación y habilidades que quienes permanecen en las zonas rurales.

De manera más amplia, la teoría económica ha abordado la migración a partir de distintos mecanismos. Gheasi y Nijkamp (2017) agrupan estos enfoques en tres grandes corrientes. La primera, asociada a la teoría neoclásica macroeconómica de Harris y Todaro (1970) y a la neoclásica microeconómica de Bauer y Zimmermann (1998), sostiene que los individuos migran para maximizar sus ingresos en respuesta a brechas salariales y a cambios en la relación capital-trabajo entre territorios. Desde esta perspectiva, la decisión migratoria incorpora un cálculo individual de costos y beneficios que incluye variables como edad, educación, costos de traslado, desempleo esperado y costos psicológicos asociados a la separación familiar.

La segunda corriente incorpora factores no estrictamente económicos. El enfoque de factores de expulsión y atracción, sistematizado por De Haas (2010) en el modelo push and pull, previamente mencionado en este capítulo, amplía el análisis hacia dimensiones sociales, políticas y ambientales que estructuran los flujos migratorios y ayudan a explicar su magnitud, aunque con limitaciones para comprender por qué algunas regiones expulsan más población que otras.

La tercera corriente corresponde a la nueva economía de la migración, desarrollada por Stark y Bloom (1985) y ampliada posteriormente por Stark (1991), que concibe la migración como una decisión colectiva de los hogares orientada a diversificar riesgos y asegurar ingresos. En este marco, la combinación de educación local, trabajo externo y remesas forma parte de una estrategia familiar, y el retorno migratorio se interpreta como un indicador de éxito, en la medida en que los retornados suelen haber acumulado capital financiero o conocimientos aplicables en sus territorios de origen.

### **2.3. La teoría de acumulación del capital humano**

Si bien Becker reconoce a diversos pioneros en la teoría del capital humano, su contribución fue central para conceptualizar su acumulación como un proceso de inversión en conocimientos, habilidades, salud y valores que incrementa la productividad y el bienestar de los individuos a lo largo del ciclo de vida (Becker, 1993). A diferencia del capital físico, el capital humano está intrínsecamente ligado a la persona y no puede separarse de ella, lo que condiciona tanto su acumulación como sus retornos.

Desde esta perspectiva, la inversión en capital humano responde a un cálculo racional de costos y beneficios. Los jóvenes tienen mayores incentivos para invertir en su formación porque disponen de un horizonte temporal más amplio para recuperar dicha inversión mediante mayores ingresos futuros. Un componente clave de estos costos corresponde a los ingresos dejados de percibir mientras la persona estudia o se capacita, es decir, los costos de oportunidad. No obstante, Becker subraya que, a diferencia del capital físico, los rendimientos de la educación pueden aumentar a medida que se acumula más conocimiento, ya que el aprendizaje de contenidos complejos resulta más eficiente cuando se dominan las bases elementales (Becker, 1993).

La familia cumple un rol fundamental como canal primario de acumulación de capital humano, no solo a través del financiamiento, sino también mediante la transmisión de conocimientos, valores, habilidades, motivación y preparación temprana. Becker (1993) señala que pequeñas diferencias iniciales en la preparación que brindan las familias tienden a amplificarse con la edad y la escolaridad, dado que los niños aprenden con mayor facilidad cuando cuentan con mejores bases, lo que se traduce en brechas significativamente mayores durante la adolescencia.

Finalmente, el autor destaca que ningún país ha alcanzado un desarrollo sostenido sin realizar inversiones sustanciales en su fuerza laboral. La acumulación de capital humano genera un círculo virtuoso, en el cual un mayor stock de conocimiento facilita la adopción y el desarrollo de nuevas tecnologías, aumentando a su vez los incentivos para seguir invirtiendo en educación. En contraste, las economías con bajos niveles iniciales de capital humano pueden quedar atrapadas en equilibrios de bajo nivel, caracterizados por alta fecundidad y estancamiento económico. En este contexto, dado que los retornos de la educación tienden a ser mayores en economías más desarrolladas, emerge una tendencia estructural a la migración del capital

humano desde países de menores ingresos hacia países de mayores niveles de desarrollo (Becker, 1993).

### 3. LA ECONOMÍA RURAL EN COLOMBIA

Aunque el país ha logrado avances significativos en crecimiento y reducción de pobreza, las brechas territoriales siguen definiendo el paisaje productivo rural. Como señalan Deininger y Olinto (2001), coexisten dos segmentos diferenciados: uno de ingresos relativamente altos, intensivo en activos y más integrado a mercados; y otro compuesto por hogares pobres dedicados a actividades no agrícolas de baja productividad, inestables y con escaso potencial de crecimiento. Este dualismo sintetiza la heterogeneidad de un entorno donde la informalidad, la desigualdad y el rezago en infraestructura limitan la convergencia con el resto de la economía.

En términos de desempeño económico, La OCDE destacó en 2022 el notable crecimiento de la economía colombiana en las últimas dos décadas. No obstante, este dinamismo convive con la mayor desigualdad regional de ingresos en el conjunto de la OCDE, donde regiones metropolitanas como Bogotá alcanzan un PIB per cápita casi cinco veces superior al de territorios rurales como Guainía o Vaupés (OECD, 2022). Si bien el periodo posterior a la crisis de 2008 trajo la sexta mayor reducción de desigualdades regionales dentro de la organización, las brechas siguen siendo amplias. La pobreza también refleja esta dinámica asimétrica: entre 2010 y 2021, la pobreza monetaria y multidimensional disminuyó más rápido en zonas rurales, pero en 2021 la pobreza multidimensional rural (31.1%) triplicó la urbana (11.5%) (Interra, 2023).

La estructura económica rural muestra un giro progresivo hacia actividades de servicios. La participación agrícola en el PIB descendió del 14% en 1995 al 7.6% en 2020, aunque su contribución aún supera el promedio de la OCDE (3.6%) (OECD, 2022). En 2019, los servicios concentraron el mayor valor agregado en las regiones rurales, impulsados por sectores como energía y administración pública, que representan el 67% del valor agregado bruto. Entre 2015 y 2021, actividades como electricidad, gas, agua y gestión de residuos (9.3% de crecimiento en empleo anual), los servicios profesionales y científicos (2.9%) y el transporte y almacenamiento (2.3%) superaron ampliamente el crecimiento del empleo agrícola (0.1%) (DANE, 2022). En zonas rurales remotas, el sector primario aún representa el 41% del valor agregado, mientras que cadenas como comercio, construcción, actividades comunitarias y servicios básicos mantienen una relevancia comparable en las economías rurales y urbanas (Köbrich y Dirven, 2007). Otras

ramas como construcción, manufactura, servicio doméstico y minería tienden a ser más importantes en las economías rurales que en el resto del país (Köbrich y Dirven, 2007).

La agricultura continúa siendo el principal empleador, concentrando el 62% de la fuerza laboral rural y el 16.4% del empleo nacional (OECD, 2022). Sin embargo, la productividad laboral agrícola es baja y se mantiene un 59% por debajo del promedio nacional, una brecha que apenas varió desde el 2005 (60%) (OECD, 2022). Esta situación responde a la atomización productiva, pues 65% de las unidades agrícolas operan en menos de 4 hectáreas, y a una cultura incipiente de cooperativismo; las fincas familiares obtienen menores ingresos por unidad de trabajo y son más intensivas en mano de obra que las explotaciones de mayor tamaño. A ello se suma la escasez de bienes y servicios productivos: el 70% de las fincas no utiliza maquinaria y carece de recursos para incorporar nuevas tecnologías (OECD, 2022). La consecuencia es una producción rural fragmentada que dificulta alcanzar escalas eficientes y adoptar estrategias de mercado modernas.

Paralelamente, el ERNA se ha convertido en una fuente creciente de ingresos. Entre 2015 y 2021, los sectores no agropecuarios crecieron mucho más rápido que la agricultura (OECD, 2022), y sus ingresos son superiores: generan el 94.5% del SMMLV frente al 69.7% de las actividades agrícolas (DNP, 2019). Las regiones rurales también presentan mayor especialización sectorial (37.6% de los trabajadores concentrados en un solo sector, frente a 24.9% en zonas urbanas) y dependen de sectores no transables como administración pública y comercio.

Pese a estos avances, persisten desafíos estructurales que condicionan la inserción productiva rural. La informalidad laboral es del 84% (y del 88% en agricultura), una tasa sustancialmente mayor a la urbana (63%), con efectos diferenciados por género: solo el 29.2% de la población ocupada rural es femenina, pese a representar el 46.8% de la población en edad de trabajar, y las mujeres realizan el 82% del trabajo doméstico no remunerado (OECD, 2022). La tenencia de la tierra presenta una concentración extrema, con un coeficiente de Gini de 0.868 en 2017, por encima del promedio latinoamericano de 0.79, y una informalidad del 52%, alcanzando niveles del 75% al 100% en 75 municipios (OECD, 2022). La infraestructura profundiza estas brechas: el 75% de la red terciaria está deteriorada, el 68% de las zonas rurales se ubica a más de cinco horas de los principales centros de comercialización y Colombia ocupó el puesto 102 de 140 países en calidad vial en 2019 (OECD, 2022). La conectividad digital reproduce estas desigualdades: solo el 28.8% de los hogares rurales accede a banda ancha y las velocidades fijas son 79% más lentas en regiones remotas (DANE, 2025).

En materia de política pública para el desarrollo rural, tras el análisis de las 16 principales normas nacionales que buscan orientar el crecimiento de la economía en las ciudades no principales, es posible concluir que, si bien hay esfuerzos por fomentar innovación y fortalecer las unidades productivas rurales, aún existe una desarticulación importante entre las capacidades del talento y la demanda de este, así como escasez de incentivos y herramientas habilitantes para los negocios. Históricamente las normas se han preguntado por el acceso a activos productivos, principalmente la tierra; promover mecanismos de financiamiento y de acceso a mercados con éxito modesto; y el desarrollo de capacidades territoriales. Este entramado normativo define quién accede a recursos escasos, bajo qué reglas y con qué incentivos económicos; y aunque las normas han surgido en distintos momentos y con énfasis sectoriales diversos, delinean un modelo de desarrollo rural donde la juventud y otros grupos diferenciados aparecen de manera desigual como sujetos económicos.

En materia de acceso a activos productivos, la tierra ocupa un lugar dual como activo físico y financiero. La Ley 160 de 1994 establece criterios de adjudicación basados en la falta o insuficiencia de tierra, priorizando objetivos distributivos y de activación productiva campesina, y complementa este enfoque con figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina para limitar la concentración y proteger economías locales. Posteriormente, el Decreto Ley 902 de 2017, en el marco del Acuerdo de Paz, unifica procedimientos de adjudicación y formalización, vincula la seguridad jurídica con el acceso a crédito y asistencia técnica, y amplía el universo de beneficiarios priorizando vulnerabilidad y afectación por el conflicto. A estos mecanismos se suma la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, que busca recuperar activos despojados y reactivar economías locales. La juventud rural, sin embargo, solo es reconocida explícitamente como sujeto económico en este eje a partir de la Ley 2539 de 2025, que incorpora a los jóvenes al sistema de reforma agraria y desarrollo rural.

El financiamiento y los mecanismos de mercado se articulan principalmente a través del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que canaliza crédito de fomento para pequeños y medianos productores mediante FINAGRO, reduce costos financieros y comparte riesgos con intermediarios. Estos instrumentos permiten financiar inversiones de largo plazo, pero su acceso efectivo depende de condiciones como formalización predial, garantías y capacidad administrativa, lo que introduce sesgos hacia unidades productivas más organizadas. Complementariamente, el Fondo de Solidaridad Agropecuario actúa como un seguro institucional frente a choques climáticos y de precios, mientras que la Ley 2046 de 2020 crea demanda institucional obligatoria para productos campesinos, reduciendo el riesgo de no venta y

estabilizando ingresos. En este bloque, la juventud rural aparece de forma marginal, ya que los criterios de elegibilidad se basan en tamaño del productor o vulnerabilidad económica, sin distinciones etarias.

El desarrollo de capacidades territoriales se concentra en educación rural, extensión agropecuaria y asociatividad como condiciones para que los activos y los instrumentos financieros se traduzcan en productividad e ingresos. El Plan Especial de Educación Rural y las normas asociadas conciben la educación como acumulación de capital humano contextualizado, orientado a reducir brechas históricas y facilitar la transición hacia actividades productivas locales, aunque su efectividad depende de capacidades institucionales territoriales desiguales. La Ley 1876 de 2017, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, redefine la extensión como un servicio público económico que reduce asimetrías de información y costos de adopción tecnológica, mientras que la política de economía solidaria fortalece la asociatividad como puente hacia mercados más exigentes. A nivel departamental, diversas ordenanzas articulan educación, innovación y apoyo productivo, funcionando como laboratorios territoriales. No obstante, aunque la juventud es más visible en el ámbito educativo, la normativa no establece vínculos obligatorios entre educación y cadenas productivas ni metas diferenciadas para jóvenes, dejando estos resultados condicionados a la capacidad de gestión de los territorios.

Este panorama muestra que la economía rural colombiana avanza a doble velocidad. Mientras el país experimenta crecimiento agregado y reducción de pobreza, las zonas rurales enfrentan rezagos estructurales en empleo, tierra, infraestructura y servicios. Así, la migración aparece como un mecanismo de ajuste que expone las tensiones entre la integración económica nacional y el rezago rural, y cuya persistencia puede profundizar la dependencia estructural, tal como advierte la teoría de sistemas-mundo (Gheasi y Nijkamp, 2017).

#### **4. APROXIMACIONES EMPÍRICAS A LA EDUCACIÓN, LA INSERCIÓN PRODUCTIVA Y LA MIGRACIÓN JUVENIL RURAL**

Los modelos de búsqueda y emparejamiento de empleo, en particular el esquema DMP de Diamond-Mortensen-Pissarides (Mortensen y Pissarides, 1994), son básicos para analizar fricciones laborales y dinámicas de empleo y desempleo de forma aplicable a los contextos rurales. El modelo de economía dual de Lewis (1954) aporta una lectura relevante sobre la coexistencia entre economías modernas o tecnificadas y economías tradicionales o agrícolas, clave para entender las diferencias en oportunidades de inserción productiva. Las teorías de

migración rural-urbana de Todaro y Harris-Todaro (1970) permiten analizar las decisiones migratorias como respuesta a diferenciales esperados de ingreso, mientras que la teoría de la transformación estructural, complementada por los aportes de Porzio et al. (2021) y los trabajos de Herrendorf y Schoellman (2018), ofrece un marco para interpretar los cambios de largo plazo en la estructura productiva y el empleo. Finalmente, la teoría del capital humano de Becker (1993), enriquecida por los desarrollos empíricos de Heckman (2008; 2014), proporciona las bases para identificar los mecanismos que conectan la educación con la inserción productiva a lo largo del ciclo de vida y la migración, introduce la categoría de jóvenes, y permite rastrear evidencia empírica sobre jóvenes rurales e ingresos basados en acumulación de capital humano.

La literatura muestra que, si bien los modelos clásicos de economía dual siguen siendo fundamentales para comprender los mercados laborales rurales, la literatura contemporánea ha ampliado estos enfoques al incorporar la heterogeneidad de empresas y trabajadores, el papel del sector informal productivo, la relevancia del ERNA y la centralidad del capital humano en los procesos de transformación estructural. A pesar de estos avances, persisten brechas significativas, especialmente en la teorización específica sobre el empleo juvenil rural y en la integración sistemática de múltiples dimensiones de heterogeneidad dentro de los modelos teóricos, lo que limita la capacidad explicativa de la literatura frente a la diversidad de trayectorias laborales observadas en los territorios rurales.

Es por eso que este capítulo recurre a investigaciones con métodos empíricos realizadas en Latinoamérica, con especial interés en documentos con resultados en Colombia. La bibliografía, usando distintos métodos y fundamentada en la teoría previamente expuesta, sugiere patrones y esboza mecanismos que parecen relacionar la educación con una mayor probabilidad de acceder a empleos mejor remunerados, con una menor dependencia del empleo agrícola de baja productividad y con una ampliación de las oportunidades de emprendimiento y arraigo territorial de las juventudes rurales, afectando de forma indirecta la migración.

Así, se presentan estudios empíricos que conectan los modelos de Lewis (1954), Todaro y Harris-Todaro (1970), con la inserción productiva de los jóvenes y su propensión a la migración rural-urbana. Posteriormente, aborda evidencia empírica asociada a la teoría del capital humano de Becker (1993), orientada a identificar los mecanismos que relacionan educación, inserción productiva y migración rural-urbana, para dar paso al capítulo de emparejamiento y barreras a la inserción productiva de los jóvenes rurales.

#### **4.1. El rol de la inserción productiva de los jóvenes rurales en la migración rural-urbana**

La inserción productiva de los jóvenes rurales es fundamental para explicar la migración rural-urbana en Colombia. La falta de acceso a empleos de calidad, la extrema dependencia de los empleos agrícolas, y las barreras de entrada al ERNA actúan como determinantes directos de la decisión de migrar, especialmente entre quienes no encuentran opciones laborales que respondan a sus expectativas de ingreso, estabilidad y movilidad social. Esta dinámica se observa de manera consistente en la literatura latinoamericana. Köbrich y Dirven (2007) sintetizan evidencia de Brasil, Chile, Ecuador, México, Nicaragua y Perú, mostrando que la educación es el principal determinante del acceso al ERNA y de los ingresos que este genera. En Colombia, Deininger y Olinto (2001) distinguen dos tipos de actividades no agrícolas: aquellas de baja productividad utilizadas por los hogares pobres como estrategia de subsistencia, y aquellas con mayores retornos, accesibles solo para familias capaces de superar barreras de entrada, tanto financieras como de capital humano. Para ampliar los beneficios privados y sociales del ERNA, los autores proponen mejorar el acceso al crédito y a seguros, fortalecer el patrimonio de los hogares pobres y, de forma central, invertir en el capital humano.

La evidencia empírica sugiere que la precariedad en el acceso al empleo explica buena parte de la migración juvenil. Un estudio en Arauca concluyó que la falta de empleo formal, la insuficiente formación técnico-profesional y los altos requisitos de entrada al mercado laboral, fueron identificados como las principales causas de migración entre jóvenes (Mina y Téllez, 2022), hallazgo coherente con lo observado en otro estudio de López et al. (2017) en Chinavita, Boyacá, donde los jóvenes también migran ante la ausencia de oportunidades laborales de calidad.

En una estructura productiva en la que los empleos no agrícolas mejor remunerados exigen altos niveles de educación y capacidades técnicas, los jóvenes deciden entre quedarse a competir en mercados laborales pequeños, o migrar a centros urbanos. Los jóvenes con mayor escolaridad tienden a evitar el trabajo asalariado agrícola y buscan empleos no agrícolas asalariados o, en menor medida, actividades por cuenta propia con mejores retornos (Köbrich y Dirven, 2007). Los datos muestran además que la fuerza laboral rural agrícola está sobrerrepresentada por mayores de 60 años, mientras que los menores de 45 años, particularmente las mujeres de 15 a 29 años, se concentran en el ERNA (Dirven, 2000). Sin embargo, no todo empleo no agrícola constituye una alternativa de movilidad: una parte

importante corresponde a empleos informales de baja productividad, con escaso potencial de desarrollo, en el “ERNA de refugio” (Dirven, 2000).

Esta fragmentación del mercado laboral rural tiene efectos directos sobre la migración. La falta de oportunidades educativas y laborales, combinada con la inseguridad, continúa impulsando los flujos migratorios en países como Colombia y Guatemala (Díaz Baca et al., 2024). Estos movimientos debilitan el tejido social rural, dificultan la renovación generacional en sectores estratégicos como la ganadería y limitan la capacidad de los territorios para adaptarse a los retos del cambio climático. Más que una elección libre, la migración juvenil parece responder a restricciones estructurales que reducen los retornos de permanecer en el campo.

En este contexto, la educación emerge como un mecanismo para mejorar la empleabilidad y ampliar las opciones de inserción productiva local. Aumentar los niveles educativos incrementa la probabilidad de acceder al ERNA más dinámico y a empleos mejor remunerados (Köbrich y Dirven, 2007). La OCDE (2022) destaca que la educación impulsa el crecimiento integral, promueve la movilidad social y contribuye a romper ciclos de pobreza al habilitar el acceso a trabajos de mayor calidad y ofrecer a los jóvenes herramientas para participar en mercados laborales más complejos. Sin embargo, las brechas de acceso y calidad educativa en la ruralidad, así como la escasa pertinencia entre oferta formativa y demanda laboral, limitan estas posibilidades. La insuficiencia de programas técnicos y profesionales, la débil articulación entre instituciones educativas y sectores productivos, y la prevalencia de vacantes que no corresponden a los perfiles disponibles en los territorios dificultan que la educación funcione como un puente hacia oportunidades locales.

La migración rural-urbana se ha consolidado como un fenómeno multicausal que reduce de forma sostenida la fuerza productiva en los territorios rurales. Según el Banco Mundial (2025), en seis décadas, la población rural del país cayó del 54% al 17% del total nacional, y en 2025, de cerca de 53 millones de habitantes, apenas unos 2 millones son jóvenes rurales. Este descenso responde a causas estructurales asociadas tanto a presiones de expulsión como a incentivos de atracción, con especial intensidad entre la población joven, que migra en mayor proporción que los adultos y con predominio del sexo masculino (Prieto et al., 2022). La literatura identifica tres macrofactores que explican este patrón, presentados a continuación a través del modelo de push-pull de De Haas (2010):

**Primer Factor: las dimensiones socioeconómica y de calidad de vida como factores de expulsión (push):**

La búsqueda de mejores oportunidades y de condiciones básicas dignas ha determinado históricamente las tasas de migración interna (DANE, 2025). Aunque el conflicto armado ha sido un principal determinante, las desigualdades persistentes, la insuficiente provisión de servicios básicos y la falta de oportunidades laborales y educativas siguen motivando la salida de habitantes rurales, especialmente jóvenes (DANE, 2025; Díaz Baca et al., 2024).

En América Latina, 11.9 millones de los 31 millones de jóvenes rurales entre 15 y 29 años están desempleados, enfrentan mayor pobreza que los adultos y registran peores condiciones que sus pares urbanos (OECD y FAO, 2019). Las motivaciones juveniles incluyen escapar de la precariedad socioeconómica (Zabala, 2021), lo que genera efectos adversos en las comunidades de origen: acelera el envejecimiento, reduce la población en edad de trabajar (García et al., 2019) y profundiza la escasez de mano de obra agrícola (Rosendo et al., 2019), agravada por la dificultad de los agricultores mayores para adoptar nuevas tecnologías (Zabala, 2021).

Este patrón coincide con la concentración de personas de mayor edad en zonas rurales, fenómeno asociado a migraciones en edades intermedias y al deterioro de servicios cuya provisión depende del tamaño de la población (Thiede et al., 2016). En Colombia, estas dinámicas se intersectan con un alto porcentaje de uniones y maternidad tempranas en zonas rurales (DANE, 2022) y con la persistencia de pobreza y vulnerabilidad alimentaria (Fajardo, 2018). A ello se suma la limitada oferta educativa, especialmente de educación terciaria, que continúa siendo un factor de salida recurrente entre jóvenes de ambos sexos (DANE, 2025).

**Segundo factor: la violencia y la seguridad como factores de expulsión (push):**

El conflicto armado ha moldeado la estructura demográfica y territorial del país, generando millones de desplazamientos hacia ciudades principales debido a que los enfrentamientos han ocurrido principalmente en áreas rurales (DANE, 2025; Martínez, 2002; OECD, 2022). El RUPD (Registro Único de Población Desplazada en Colombia) registró la expulsión de 774.494 hogares en 1.115 municipios. Además del conflicto, disputas territoriales y procesos de acumulación de tierras han obligado a amplios segmentos de la población rural a migrar hacia ciudades intermedias y grandes, impulsando patrones de urbanización y metropolización que siguen vigentes. Para la juventud rural, la inseguridad aparece entre los principales detonantes de la decisión migratoria, junto con el desempleo y la falta de oportunidades de estudio (Díaz Baca et al., 2024).

**Tercer factor: Factores Demográficos y de Contexto Urbano como factores de atracción (Pull):**

Los principales sitios de origen de las migraciones internas -Bogotá (26.60%), Antioquia (7.30%), Cundinamarca (5.70%) y Valle del Cauca (5.60%)- concentran también los mayores porcentajes de recepción: 14.90%, 7.30%, 17.20% y 6.40%, respectivamente (International Organization for Migration, 2021). Estas regiones ofrecen salarios más altos que permiten aumentar consumo, ahorrar y apoyar económicamente a los hogares de origen (Díaz Baca et al., 2024). Asimismo, las ciudades presentan mayores opciones educativas y laborales, mientras que en el campo la escasez de empleo formal, la débil formación técnica y profesional y los requisitos excesivos para acceder a trabajos formales limitan las posibilidades de inserción juvenil (Mina y Téllez, 2022; López et al., 2017).

Estas dinámicas sugieren que la migración rural-urbana no puede comprenderse únicamente como un ajuste poblacional local, sino como un proceso estructural que reconfigura los mercados laborales, altera la distribución etaria y redistribuye capacidades económicas entre territorios.

La migración surge entonces como una estrategia de adaptación frente a la falta de oportunidades y las deficiencias de los mercados laborales rurales. Los jóvenes migran para buscar empleo, acceder a educación y mejorar su estabilidad económica y social, impulsados por factores sociales, económicos y políticos que caracterizan a América Latina (Díaz Baca et al., 2024). La desigualdad territorial, la ausencia de servicios básicos y la inseguridad continúan siendo motivos centrales para abandonar el territorio (Díaz Baca et al., 2024). Estas decisiones suelen ser colectivas: las familias designan a los jóvenes para migrar con el fin de superar las limitaciones del mercado laboral local y proveer asistencia económica al hogar (Díaz Baca et al., 2024). La idea de progreso asociada a la ciudad consolida esta predisposición migratoria (Erazo-Borrás et al., 2022).

Las consecuencias de la migración en las zonas de origen son profundas. La salida de jóvenes reduce la disponibilidad de mano de obra, agrava la escasez laboral en sectores clave y dificulta la transferencia generacional en las actividades agropecuarias (Díaz Baca et al., 2024). Colombia presenta un envejecimiento progresivo del campo: la edad promedio de los productores es de 50 años (DANE, 2025). A ello se suma que las personas mayores enfrentan mayores dificultades para adoptar nuevas tecnologías, lo que limita la modernización agrícola (Díaz Baca et al., 2024). Sin un recambio generacional con competencias adaptadas a los cambios

tecnológicos, los territorios rurales pierden competitividad frente a contextos urbanos e incluso internacionales más dinámicos (Díaz Baca et al., 2024).

### ***La migración como un fenómeno económico***

La migración opera como una respuesta racional frente a disparidades persistentes entre territorios y como un mecanismo para redistribuir riesgos en contextos de vulnerabilidad estructural. A partir de los textos de Bhattacharya (1993) y de Gheasi y Nijkamp (2017), se pueden identificar cuatro aristas que explican por qué jóvenes y adultos optan por salir del campo.

La primera se relaciona con el desempleo y la informalidad laboral. La falta de empleo formal aparece como la principal causa de migración juvenil en estudios específicos en Colombia y Guatemala (Díaz Baca et al., 2024), un patrón corroborado para contextos locales como Chinavita, Boyacá, donde los jóvenes deciden partir ante la ausencia de oportunidades laborales estables (López et al., 2017). Dinámicas similares se observan en Guatemala, donde la búsqueda de trabajo está asociada con el alto costo de satisfacer necesidades básicas y con niveles significativos de pobreza (Santibáñez et al., 2017). Estos estudios también destacan ingresos bajos, inestabilidad laboral, restricciones para adquirir bienes y servicios, y la responsabilidad de los jóvenes de apoyar financieramente a sus hogares como factores que presionan la salida. La migración se convierte así en un intento por superar la precariedad que caracteriza los mercados de trabajo rurales.

La segunda arista es la pobreza y los bajos ingresos, un elemento persistente que profundiza la brecha entre zonas urbanas y rurales. En 2015, la incidencia de pobreza monetaria rural fue 1.7 veces mayor que la urbana (24% frente a 40%) (Ramírez, 2016). Aunque Colombia no se ubica entre los países con mayor pobreza rural en América Latina, sí presenta una de las brechas urbano-rurales más marcadas. Según Santos et al. (2015), la pobreza multidimensional rural era la octava más baja entre catorce países analizados, pero registraba la segunda brecha más alta respecto de la pobreza urbana. Los datos nacionales del IPM refuerzan esta desigualdad: en 2015, la pobreza multidimensional rural fue 3.7 veces mayor que la urbana. Estos indicadores reflejan ingresos insuficientes y una limitada acumulación de activos productivos, rasgos característicos de los hogares rurales (Ramírez, 2016). Además, solo 36% de estos hogares tiene acceso a tierras y menos del 6% accede a asistencia técnica, crédito o riego intrapredial (Minagricultura, 2019). La diversificación de ingresos muestra otro contraste: mientras el 51% de la población rural continúa empleándose en agricultura, las actividades no agropecuarias generan mayores ingresos, 94.5% del SMMLV frente a 69.7% en las

agropecuarias (DNP, 2015; Minagricultura, 2019), lo que refuerza los incentivos a migrar hacia mercados con retornos superiores.

Una tercera arista se vincula con la falta de activos y oportunidades productivas. La baja tenencia de tierra, la limitada asistencia técnica y la escasez de servicios productivos reducen las capacidades económicas de los hogares rurales para sostener emprendimientos o actividades agrícolas competitivas. El acceso restringido a instrumentos de crédito y riego intrapredial reproduce una estructura productiva donde predominan unidades de baja escala y baja productividad (Minagricultura, 2019). Ante estas limitaciones, la migración aparece como una vía para suplir la ausencia de medios materiales que permitan mejorar los ingresos desde el territorio de origen.

La cuarta arista se relaciona con la dependencia estructural que enfrentan los hogares rurales. Desde la nueva economía de la migración laboral, la decisión de migrar no se interpreta como un acto individual, sino como una estrategia colectiva orientada a superar fallas del mercado, en particular la falta de empleo y la insuficiencia de ingresos (Gheasi y Nijkamp, 2017). Estudios recientes muestran que tanto en Guatemala como en Colombia los jóvenes actúan como “elegidos” para migrar en nombre de sus hogares, buscando oportunidades educativas y laborales que los mercados locales no pueden proveer (Díaz Baca et al., 2024). Esta perspectiva enfatiza que la migración juvenil responde a necesidades económicas del hogar y refleja la incapacidad del territorio para ofrecer alternativas sostenibles.

A pesar de estas barreras, la literatura sugiere que fortalecer la formación puede modificar las decisiones migratorias. El desarrollo de modelos educativos pertinentes y articulados con sectores emergentes como turismo, servicios digitales, bioeconomía, o manufactura con valor agregado, podría contribuir a reducir la migración juvenil al ampliar el espectro de oportunidades laborales en los territorios y desvincular progresivamente el concepto de ruralidad del de agricultura, abriendo paso a una ruralidad diversa, activa y conectada (Köbrich y Dirven, 2007). Asimismo, construir procesos educativos que formen una ciudadanía rural crítica, capaz de valorar lo local y “repensar lo global” desde el territorio (Rayón y De las Heras, 2012), puede fortalecer el arraigo y ofrecer caminos de realización económica sin necesidad de migrar.

#### **4.2. Determinantes de la inserción productiva de los jóvenes rurales: el papel de la acumulación de capital humano en el empleo y el emprendimiento**

Herrendorf y Schoellman (2018), y Porzio et al. (2021), ofrecen una perspectiva relevante sobre cómo la transformación estructural (el movimiento de trabajadores de la agricultura a otros sectores) está intrínsecamente ligada al capital humano y a las barreras que enfrentan los distintos grupos de edad.

La investigación de Porzio et al. (2021) subraya que la transformación estructural no depende únicamente de la demanda de bienes ni del progreso tecnológico, sino de manera decisiva del “lado humano” del proceso. Según los autores, casi la mitad de la reducción global del empleo agrícola observada durante el siglo XX estuvo asociada a la entrada de nuevas cohortes de jóvenes al mercado laboral, caracterizadas por niveles educativos más altos. Estos mayores niveles de educación resultan relativamente más valiosos fuera del sector agrícola, lo que disminuye la oferta de mano de obra destinada a dicho sector. Desde un modelo de reasignación laboral con fricciones, los autores concluyen que el crecimiento del capital humano, tanto como factor mediador como impulsor independiente, contribuyó de forma significativa a la caída de la oferta de trabajo agrícola (Porzio et al., 2021).

El crecimiento del capital humano actúa tanto como un motor independiente como un mediador que amplifica los cambios tecnológicos, explicando hasta un 40% de la reasignación laboral si se mantienen los precios fijos (Porzio et al., 2021). No obstante, el autor identifica que el acceso al empleo no agrícola no es igual para todos los jóvenes debido a las fricciones de movilidad (en el sentido del modelo DMP), que son más severas para los trabajadores mayores, mientras que los jóvenes están “menos limitados” por estas fricciones al inicio de su carrera.

También, Porzio et al. (2021) identifica la existencia de costos fijos de movilidad (mudanza, reentrenamiento, costos emocionales) y costos de flujo (pérdida de redes de seguridad comunitaria en zonas rurales o diferencias de amenidades). En los países de ingresos bajos y medios, se estima que los trabajadores están condicionados por estas barreras durante el último 30% de su vida laboral (aproximadamente a partir de los 49 años), lo que resalta la importancia de la movilidad en las etapas tempranas de la juventud.

A estas fricciones, se suman las brechas salariales entre sectores y de selección a las que se enfrentan los jóvenes, estudiadas por Herrendorf y Schoellman (2018). Los trabajadores con mayores niveles de capital humano tienden a seleccionarse a sí mismos para sectores no agrícolas, donde los retornos de Mincer (el aumento salarial por año adicional de estudio) suelen

ser más altos, mientras que la agricultura tiene consistentemente trabajadores menos educados y con retornos de Mincer más bajos (Herrendorf y Schoellman, 2018).

Mientras que la literatura clásica sugiere que barreras institucionales (como el sistema hukou en China o el sistema de castas en India) impiden la movilidad, estos autores sostienen que la capacidad innata (selección) explica una parte mayor de la brecha de lo que se creía. Al controlar por las características observadas y no observadas de los trabajadores, concluyen que las barreras a la transformación estructural son más pequeñas de lo que la literatura de macrodesarrollo ha argumentado tradicionalmente (Herrendorf y Schoellman, 2018).

Tanto Porzio et al. (2021) como Herrendorf y Schoellman (2018), identifican que la educación es necesaria para superar las barreras de entrada a sectores más productivos, pues existe un vínculo causal donde un año extra de escolaridad reduce la probabilidad de empleo agrícola en aproximadamente un 10% a 17%. También, las reformas que expanden la educación obligatoria o la construcción de escuelas (como se vio en Indonesia) son herramientas directas que los gobiernos pueden usar para acelerar la transformación estructural y mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores modernos

La literatura en economía del desarrollo humano señala que cerca de la mitad de la variabilidad en los ingresos de por vida se explica por atributos formados antes de los 18 años, lo que confiere relevancia a la acumulación temprana de capacidades (Heckman y Mosso, 2014). Estos atributos abarcan tanto habilidades cognitivas (o técnicas) como no cognitivas (también conocidas como socioemocionales, humanas o atributos de carácter), las cuales se configuran a través de procesos dinámicos donde la inversión acumulada y la calidad del entorno importan más que los niveles iniciales.

Los hallazgos empíricos sugieren que la inversión educativa temprana incrementa de forma sostenida la empleabilidad y los ingresos laborales adultos, principalmente a través del desarrollo de habilidades socioemocionales. La tecnología de formación de habilidades propuesta por Heckman señala que las capacidades cognitivas y no cognitivas interactúan de manera acumulativa; por ello, las intervenciones iniciales producen retornos superiores a los obtenidos en etapas posteriores del ciclo de vida (Heckman y Mosso, 2014).

Por ejemplo, la evidencia de dos programas de atención integral en primera infancia, Perry Preschool (PPP) y Abecedarian (ABC), confirman estos patrones. En PPP, los hombres tratados presentan un aumento del 29% en la probabilidad de estar empleados a los 40 años, mientras que las mujeres muestran una reducción sustancial en la dependencia de transferencias públicas y mejoras en logros educativos (Elango et al., 2015). Asimismo, el ingreso laboral anual a los 40

años aumenta en USD 8.213 para hombres y USD 6.166 para mujeres, aunque estas cifras tienen niveles mixtos de significancia estadística. Estas mejoras se sostienen incluso cuando los efectos sobre el cociente intelectual disminuyen en la adolescencia, lo que parece sugerir un papel especial de las habilidades socioemocionales y la motivación académica en los efectos de largo plazo.

La evaluación del programa ABC concluye en el mismo sentido. A los 30 años, el tratamiento aumenta la probabilidad de empleo en 14,7% para mujeres y 30,2% para hombres, acompañado de incrementos en el ingreso laboral anual de USD 3.578 y USD 17.214, respectivamente (Elango et al., 2015). Siendo unos de los principales resultados de la intervención, los efectos también parecen explicarse en gran parte por el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como la orientación a tareas y la capacidad de autorregulación, más que por la cognición pura; de hecho, la cadena causal muestra que, para los resultados altamente vinculados al mercado laboral (como acceso a seguridad social, salarios, calidad de los contratos, etc), el componente cognitivo explica proporcionalmente menos del efecto total.

Las intervenciones correctivas tardías para adolescentes que carecen de una base de habilidades sólida en la primera infancia son mucho menos productivas que la inversión temprana. Los estudios de Elango et al. estimaron que para lograr los resultados del PPP mediante una intervención adolescente se requiere entre 35% y 50% más de inversión en costos.

No obstante, conforme avanzan en la vida, las habilidades cognitivas (técnicas) comienzan a adquirir relevancia, especialmente cuando de emprender se trata. Basado en estudios en Cuba y Perú, Acuña Romero sugiere un valor agregado cuando el emprendedor ha sido formado en pregrados relacionados a la Economía, o es profesional con o sin posgrado en diferentes áreas (2024). La literatura sugiere que esto podría estar ligado al conocimiento técnico que les permite identificar nichos en las industrias que podrían beneficiarse de nuevos emprendimientos.

Desde la perspectiva rural en Colombia, si bien hay literatura sobre la correlación entre éxito emprendedor y habilidades cognitivas y no cognitivas, e incluso el valor de la educación posgradual, existen otras características relevantes no relacionadas a la formación sino a las características sociales y demográficas que tienen detrás: hay mayor favorabilidad para los hombres, con posgrado, provenientes de familias con altos niveles formativos, de estratos altos, no solteros, y entre los 32 y 38 años (Arias Vargas et al., 2021). Estos detalles no son menores, pues como se ha sugerido en otros apartados del capítulo, resaltan que el éxito económico no depende sólo de la persona, sino también de su entorno.

De forma sistémica, la literatura sugiere 3 elementos determinantes en la inserción productiva de los jóvenes: las competencias individuales o capital humano, los factores socioeconómicos y demográficos, y las barreras contextuales o factores de empleabilidad externa. A continuación, se desarrollarán las ideas desde la literatura sobre acumulación de capital humano, conectadas con la teoría de acumulación de Becker, y los últimos dos elementos se abordarán de forma profunda en el capítulo 5 de barreras, incluyendo la conexión explícita con las categorías de formación y juventud rural.

### ***Habilidades y competencias individuales o Capital Humano (KH)***

La inversión en capital humano parece ser una condición necesaria para ampliar las posibilidades de empleo y emprendimiento de los jóvenes rurales, en particular para escapar del trabajo agrícola precario e informal. Asegurar el acceso a la educación tiene implicaciones multidimensionales: promueve el desarrollo integral de la población, favorece la movilidad social, contribuye a romper ciclos de pobreza y permite acumular capacidades que habilitan el acceso a empleos mejor remunerados, además de formar ciudadanos conscientes de su rol en la sociedad (OECD, 2022).

El desarrollo de capital humano es fundamental para la inserción productiva y constituye un proceso acumulativo que comienza en etapas tempranas, pero se mantiene a lo largo de la vida. La literatura identifica tres componentes: el primero son las habilidades cognitivas o técnicas asociadas a la educación formal y especializada; el segundo corresponde a las habilidades no cognitivas, que abarcan las dimensiones socioemocionales, transversales y los atributos de carácter y actitud; y el tercero integra ambos conjuntos y se expresa en la capacidad de movilizar habilidades cognitivas y no cognitivas en función de las motivaciones individuales, elemento estrechamente ligado a las competencias de gestión, emprendimiento y empleabilidad.

#### **Primer componente - Capital humano cognitivo: educación formal, especializada y nivel educativo.**

El nivel educativo formal parece ser uno de los determinantes más sólidos de la inserción laboral en la ruralidad colombiana. La evidencia sugiere que mayores niveles de escolaridad incrementan significativamente la probabilidad de acceder al segmento moderno del mercado laboral rural (en el sentido de economía dual de Lewis), caracterizado por una mayor productividad, cumplimiento regulatorio y mejores ingresos, frente al segmento tradicional, más numeroso y marcado por informalidad y ajustes vía precios (Leibovich et al., 2006). En 2005, la probabilidad de que un joven en el área rural dispersa estuviera ocupado en el sector moderno

aumentaba de forma sustancial con el nivel educativo, especialmente cuando alcanzaba la educación superior (Leibovich et al., 2006).

Esta relación es consistente en América Latina. Köbrich y Dirven (2007) muestran que los jóvenes ocupados en el ERNA tienen, en promedio, más años de escolaridad que quienes trabajan en la agricultura. Las brechas educativas entre estos sectores son persistentes: las mayores se observan en Panamá y República Dominicana (3.7 y 3.5 años), y las menores en Guatemala y Honduras (2.0 y 1.9 años), mientras que entre sectores de servicios y no servicios, Ecuador, Brasil, República Dominicana y El Salvador muestran diferencias de 2.5, 2.3, 0.5 y 0.4 años, respectivamente. Aunque una mayor formación aumenta la probabilidad de insertarse en actividades no agrícolas y obtener empleos mejor remunerados, los autores advierten que los segmentos menos productivos del ERNA no siempre presentan correlación significativa con el nivel educativo, reflejando la existencia de empleos de “refugio” que absorben a trabajadores con baja escolaridad pero con escasas posibilidades de movilidad.

En Colombia, la educación posmedia (universitaria y técnica) ofrece la mayor ventaja competitiva para acceder a empleo formal y oportunidades de emprendimiento incluso en la ruralidad (OECD, 2022). Asimismo, la informalidad disminuye de manera marcada conforme aumenta la escolaridad: 24% entre quienes tienen educación terciaria, frente a 59% para secundaria, 81% para primaria y 91% para quienes no tienen educación (OECD, 2022). La formación posmedia también contribuye a la formalización laboral en adultos, facilitando la reinserción de trabajadores que difícilmente retornarían a la educación tradicional (OECD, 2022). Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado: solo 1.78% de la población rural alcanza el nivel universitario, comparado con 8.25% en cabeceras municipales (Interra, 2023), y solo dos de cada diez bachilleres rurales ingresan a la educación superior (Díaz Baca et al., 2024).

El nivel educativo funciona, además, como un mecanismo de asignación dentro del mercado laboral. Los jóvenes con baja escolaridad se concentran en empleos de baja productividad, principalmente en agricultura, servicio doméstico o comercio informal (Köbrich y Dirven, 2007). Por el contrario, quienes cuentan con secundaria completa o más tienen mayor probabilidad de ubicarse en el sector moderno, donde dos de cada tres trabajadores con educación superior logran vincularse (Leibovich et al., 2006). Estos patrones refuerzan la idea de que la educación es una barrera crítica para ingresar al ERNA más productivo y acceder a empleos con mejores remuneraciones.

La relación entre educación y emprendimiento sigue la misma lógica. La educación universitaria contribuye al desarrollo económico mediante la creación de empleo, la inclusión

social y la formación empresarial (Acuña Romero, 2024). La formación emprendedora dota a los estudiantes de los conocimientos necesarios para crear y gestionar iniciativas productivas, lo que aumenta su probabilidad de consolidar un proyecto económico propio. Sin embargo, la baja disponibilidad de programas técnicos y profesionales en áreas clave limita la alineación entre formación y demanda laboral rural.

Un estudio realizado en 2023 por la Fundación Interra para las Fundaciones Bancolombia y Aurelio Llano Posada, identificó algunas de las habilidades técnicas específicas altamente demandadas en sectores clave de la Economía Rural No Agrícola, lo que podría dar pistas sobre las competencias que los jóvenes rurales deberían buscar desarrollar para insertarse en mejores condiciones en las cadenas productivas no agrícolas relevantes en sus territorios:

Tabla 1. Habilidades técnicas demandadas por sector económico no agrícola

<b>Sector Económico (No Agrícola)</b>	<b>Nivel Educativo / Ocupación</b>	<b>Habilidades Técnicas Demandadas</b>
Turismo	Transversal a todos los cargos	Manejo de TIC, dominio del idioma inglés, servicio al cliente, estructuración de costos, legislación turística, conservación ambiental, marketing digital, y el desarrollo de paquetes turísticos innovadores.
Energías Renovables	Operativo (instaladores/operarios)	Conocimientos en sistemas fotovoltaicos y tecnología aplicada al sector energético, y conocimientos del mercado energético.
Comercio/Servicios	General	Logística y el cumplimiento de requisitos y estándares de calidad.

Elaboración propia a partir de datos Interra (2023)

La comparación con el empleo rural agrícola refuerza esta divergencia. Las actividades agropecuarias, aunque centrales para la economía rural, muestran menores retornos económicos y requieren perfiles educativos distintos. Las actividades no agrícolas generan ingresos equivalentes al 94.5% del SMMLV, frente al 69.7% del sector agrícola (Minagricultura, 2019), lo que explica por qué la mayor parte del ingreso no agrícola proviene del empleo asalariado en servicios (CEPAL, 2004). A pesar de esto, en Colombia no existe una política pública clara que facilite el desarrollo del ERNA, lo que limita su aprovechamiento (Minagricultura, 2019).

El estudio de Interra (2023) para las cadenas agrícolas, también busca aportar conocimiento sobre las habilidades que demandan los sectores productivos en cadenas específicas, buscando mitigar esta brecha en los ingresos agrícolas y no agrícolas, promoviendo que el talento se enfoque en las áreas no operativas de los negocios agrícolas.

Tabla 2. Habilidades técnicas demandadas por sector económico agrícola

Sector Económico (Agrícola/Agroindustrial)	Nivel Educativo / Ocupación	Habilidades Técnicas Demandadas
Ganadería Bovina	Gerentes/Administradores	Análisis financiero y presupuestario, Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), inocuidad alimentaria, manejo de medicamentos, planeación estratégica, sistemas de producción sostenible, y manejo del agua.
	Nivel Profesional/Técnico	Bioteología reproductiva, diagnóstico de laboratorio, nutrición, patología y reproducción animal, y sistemas de producción sostenible.
Agrícola (Cacao, Plátano, Aguacate)	Gerentes/Administradores	Trazabilidad e inocuidad de alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), agroindustria, fortalecimiento empresarial, uso de las TIC, y mercadeo agrario.
	Nivel Operativo	Manejo de recurso hídrico, poscosecha, manejo apropiado de agroinsumos, y manejo fitosanitario de los cultivos

Elaboración propia a partir de datos Interra (2023)

Así, aunque la educación formal aumenta de manera sustantiva la probabilidad de acceder a empleos mejor remunerados, de insertarse en el ERNA dinámico y de emprender con mayores posibilidades de éxito, el capital humano no puede reducirse a la acumulación de años de estudio. Las trayectorias productivas dependen también de habilidades no cognitivas como la resolución de problemas, la perseverancia o la autoconfianza, que influyen en la empleabilidad y en la sostenibilidad de los emprendimientos.

### **Componente 2 - Capital humano no cognitivo: competencias transversales, habilidades blandas, y atributos de carácter y actitud**

La literatura sugiere de forma consistente que las habilidades no cognitivas (también denominadas habilidades socioemocionales, blandas o rasgos de personalidad) son tan predictivas del éxito socioeconómico como las habilidades cognitivas. Investigaciones de largo aliento muestran que atributos como la perseverancia, la autodisciplina, la motivación, el autocontrol, la paciencia y la regulación emocional influyen de manera directa en resultados

fundamentales como los ingresos, la participación en el mercado laboral, la asistencia a la universidad y la probabilidad de involucrarse en actividades riesgosas (Heckman, 2008; Heckman y Mosso, 2014). Estas habilidades moldean comportamientos que permiten a los jóvenes sostener trayectorias de formación y empleo, y la evidencia sugiere que incluso contribuyen al desempeño en pruebas cognitivas, al potenciar la atención, la constancia y la capacidad de enfrentar tareas exigentes (Heckman, 2008).

La categoría de rasgos de personalidad abarca elementos como la perseverancia, la disciplina, la preferencia temporal, la aversión al riesgo, la autoestima, el autocontrol y la motivación, todos ellos con efectos documentados sobre los salarios, la escolaridad, el comportamiento en la adolescencia, la probabilidad de embarazo temprano, el tabaquismo, la participación en el crimen y la adherencia a protocolos de salud (Heckman, 2008). Entre estos rasgos destaca la escrupulosidad o conscientiousness, entendida como la tendencia a ser responsable, organizado, trabajador, diligente y orientado a metas, asociada además a un fuerte autocontrol y a un compromiso por realizar las tareas con calidad. La literatura la identifica como el rasgo más consistentemente vinculado con el éxito adulto, el rendimiento laboral y la acumulación de riqueza. Evidencia experimental muestra que intervenciones educativas pueden aumentar la escrupulosidad y la flexibilidad cognitiva, asociada a la capacidad de cambiar de perspectiva, razonar, planear y adaptarse a nuevas exigencias, competencias cruciales para el desempeño laboral y la creatividad (Walker et al., 2022).

A diferencia de las habilidades cognitivas, las habilidades de personalidad son maleables más allá de la primera infancia y pueden desarrollarse durante la adolescencia y la adultez temprana. La literatura sugiere que las intervenciones más efectivas para adolescentes se centran precisamente en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y de carácter mediante tutorías, mentorías y acompañamiento personal, que apuntan al desarrollo de la autodisciplina, la regulación emocional, la motivación y la capacidad de cooperación (Heckman y Mosso, 2014).

Las habilidades blandas vinculadas al liderazgo, el trabajo en equipo y la resiliencia también influyen en la empleabilidad y el emprendimiento. La formación puede fortalecer la capacidad de resolver conflictos, coordinar esfuerzos colectivos y adaptarse a contextos cambiantes (Jurado Paz, 2022; Lechuga Nevárez, 2022). En contextos rurales, estudios sugieren que muchos jóvenes no poseen inicialmente habilidades como la autogestión, la toma de decisiones o la administración del tiempo, elementos que son fundamentales para buscar y mantener un empleo (Tele, 2016). La resiliencia, entendida como la capacidad de enfrentar

obstáculos y reponerse ante la adversidad, aparece como un atributo especialmente importante en entornos productivos inestables o marcados por la incertidumbre (Lechuga Nevárez, 2022).

La inteligencia emocional constituye otro componente primario de este conjunto de habilidades. Jurado Paz (2022) recoge una definición que incluye la capacidad de reconocer y dominar las emociones propias, comprender las de los demás y actuar empáticamente. Este tipo de inteligencia permite articular intereses personales con la construcción de bienestar colectivo, favoreciendo formas de liderazgo más efectivas basadas en la persuasión, la comprensión mutua y la acción intencional. El desarrollo de estas competencias contribuye a fortalecer la autoestima, la creatividad y la innovación, elementos cruciales para enfrentar situaciones difíciles y sostener esfuerzos emprendedores en el tiempo (Jurado Paz, 2022).

Los atributos de carácter como la perseverancia, tenacidad, autoconfianza y capacidad para identificar alternativas y resolver conflictos, son particularmente valorados tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. Jurado Paz (2022) destaca que la perseverancia constituye “el gran secreto” de muchos emprendedores exitosos, pues permite persistir frente a la incertidumbre, reajustar estrategias y no desistir ante obstáculos que otros considerarían insuperables. En la literatura sobre juventud rural, estos atributos son fundamentales para la construcción de proyectos de vida autónomos y para ejercer liderazgo comunitario, como sugiere Erazo Borrás (2022) en relación con los efectos de la autoestima y la motivación sobre la toma de decisiones y la participación social.

La evidencia también sugiere que las habilidades no cognitivas tienen un valor creciente en la economía moderna, donde se demandan cada vez más capacidades de interacción social, colaboración, comunicación y adaptabilidad (Heckman, 2008). La autodisciplina, la gestión del tiempo, la toma de decisiones y la habilidad de trabajar con otros aparecen de manera recurrente como factores determinantes para encontrar y conservar un empleo (Tele, 2016). Estas capacidades facilitan la inserción en entornos laborales donde la coordinación, la resolución de problemas y la adaptabilidad son esenciales.

En conjunto, la literatura revisada sugiere que las habilidades no cognitivas son tan importantes como las cognitivas y técnicas para el éxito económico, y el desarrollo de capital humano requiere un enfoque integral que combine la educación formal avanzada (necesaria para el acceso a empleos de alta remuneración) y la formación técnica especializada. Su influencia se manifiesta en la empleabilidad, en la sostenibilidad de los emprendimientos y en la capacidad de los jóvenes para desenvolverse en contextos laborales complejos. Aunque el desarrollo de habilidades técnicas y educativas es fundamental, no basta por sí solo: el desempeño económico

depende de la combinación de ambos tipos de capacidades, cuya interacción potencia los resultados laborales y productivos de la juventud rural.

**Componente 3 - Capital humano cognitivo y no cognitivo: las habilidades de gestión, emprendimiento, y empleabilidad.**

La literatura sugiere que la empleabilidad y el emprendimiento dependen de la combinación entre las habilidades cognitivas derivadas de la educación formal y las habilidades no cognitivas o de carácter que moldean los comportamientos productivos, en el sentido de Heckman. Esta interacción determina en gran medida la capacidad de los jóvenes para movilizar sus conocimientos, enfrentar la incertidumbre y actuar estratégicamente en contextos rurales donde las oportunidades son escasas y la competencia por recursos es alta. Desde esta perspectiva, el emprendimiento se concibe como una expresión compleja de capacidades humanas y no solo un acto económico, que implica iniciativa, liderazgo, creación de valor y un compromiso simultáneo con el bienestar individual y colectivo (Jurado Paz, 2022). Este enfoque reconoce que emprender exige tanto aptitud técnica como actitud, es decir, la capacidad de transformar ideas en acciones mediante motivación, organización, persistencia y cooperación.

Estudios como los de Castañeda et al. (2010), McQuaid y Lindsay (2005) y Jurado Paz (2022) argumentan que la empleabilidad juvenil depende de un repertorio amplio de competencias que integra habilidades cognitivas, digitales, sociales, emprendedoras y de liderazgo. Esto sugiere la educación no formal, especialmente en territorios donde la oferta de formación superior es limitada o poco pertinente, como un espacio estratégico para fortalecer capacidades adaptativas y contextualizadas. La literatura argumenta que algunas competencias desarrolladas para emprender también se transfieren al empleo asalariado. Jurado Paz (2022) observa que atributos como el liderazgo, la proactividad, la inteligencia emocional, la persistencia y la resiliencia (agrupadas en las dimensiones de poder, afiliación y logro) no solo favorecen la creación de empresas, sino que potencian la empleabilidad al impulsar la innovación, la flexibilidad y la modernización dentro de las organizaciones.

Tabla 3. Competencias emprendedoras esenciales

Dimensión	Competencia
Dimensión de poder	Liderazgo
	Trabajo en equipo
Dimensión de afiliación	Proactividad

	Inteligencia emocional
Dimensión de logro	Persistencia
	Resiliencia

*Elaboración propia a partir de Jurado Paz, 2022. Emprendimiento rural como estrategia de desarrollo territorial: una revisión documental.*

En este sentido, el diseño de modelos educativos con enfoque territorial adquiere especial relevancia. La evaluación del programa Jóvenes Emprendedores Rurales del SENA, implementado entre 2005 y 2008, concluyó que la combinación de formación técnica con acompañamiento en terreno, asesoría personalizada y desarrollo de habilidades emprendedoras fueron determinantes para fortalecer la capacidad de los participantes para crear microempresas viables, incrementar ingresos y consolidar redes de cooperación comunitaria (Castañeda et al., 2010). Este tipo de intervenciones muestran el potencial de estrategias formativas que integran saberes técnicos con habilidades socioemocionales, ajustadas a las vocaciones productivas locales.

Metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque por competencias o el blended learning han mostrado resultados significativos en la preparación para el empleo y el emprendimiento. El programa “Conozca de Empresa”, implementado por la OIT en Perú, demostró mediante un diseño cuasiexperimental que la formación híbrida elevó en 68% las competencias de emprendimiento de nivel alto y permitió que el 98% de los estudiantes aplicara sus conocimientos en casos reales de mercado (Acuña Romero, 2024). Estas metodologías promueven la autonomía, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, habilidades esenciales para desempeñarse en economías rurales caracterizadas por la volatilidad y la baja diversificación (Muñoz Lira, 2022). Asimismo, el emprendimiento rural abre opciones de ocupación en territorios donde el empleo formal es escaso, convirtiéndose en un motor de innovación y revitalización económica (Lechuga-Nevárez, 2022).

El liderazgo amplifica este efecto. Jóvenes con capacidades de liderazgo están mejor preparados para gestionar recursos, construir redes de apoyo, incidir en gobiernos locales y liderar procesos colectivos de transformación territorial (Castañeda et al., 2010). Estas habilidades fortalecen también las competencias socioemocionales como la comunicación, empatía y resiliencia, que permiten enfrentar entornos fragmentados y de alta incertidumbre.

La evidencia del programa Jóvenes Emprendedores Rurales del SENA refuerza la idea de que las habilidades emprendedoras benefician tanto a quienes crean empresas como a

quienes optan por emplearse. A través de un Propensity Score Matching, Castañeda et al. (2010) hallaron que los participantes incrementaron su ingreso laboral por hora y su probabilidad de empleo entre un 13% y un 14% respecto al grupo de control. Además, incluso los jóvenes que no emprendieron reportaron una percepción más favorable sobre sus empleos, reflejando que competencias como la gestión, la resolución de conflictos, la capacidad de establecer contactos y la propensión a la creación de empresas fortalecen la inserción laboral más allá del emprendimiento en sentido estricto.

No obstante, aunque el emprendimiento se promueve como una salida al desempleo rural, Díaz Baca et al. sugieren que los jóvenes carecen de respaldo institucional suficiente para iniciar proyectos productivos o integrarse plenamente al mercado laboral (2024). La falta de capital financiero es una barrera crítica (Acuña Romero, 2024), lo que obliga a que la mayoría de los emprendimientos dependan de ahorros personales (Lechuga Nevárez, 2022). Esta expectativa de “hágalo usted mismo” ignora las limitaciones estructurales de los territorios y contrasta con la preferencia de los jóvenes por empleos formales y estables, así como con la falta de experiencia técnica necesaria para iniciar negocios (White, 2012).

Las desigualdades de género profundizan aún más la brecha de acceso a oportunidades. Las mujeres rurales cargan con mayores responsabilidades domésticas no remuneradas, lo que reduce su capacidad de generar ingresos (Díaz Baca et al., 2024) y dificulta su permanencia en el sistema educativo (Interra, 2023). Al mismo tiempo, los hombres jóvenes tienen una mayor propensión a emprender que las mujeres (Acuña Romero, 2024). Las desventajas se intensifican entre quienes provienen de familias de bajos recursos, pues la pobreza limita el acceso a educación y condiciona negativamente las expectativas de futuro (Galvis Restrepo, 2022).

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el éxito económico no depende únicamente de las habilidades cognitivas ni exclusivamente de las habilidades no cognitivas, sino de su integración estratégica. La formación técnica dota a los jóvenes de conocimientos específicos y capacidades operativas, mientras que las habilidades socioemocionales les permiten orientar esos conocimientos hacia metas de empleo o emprendimiento, sostener el esfuerzo y adaptarse a contextos cambiantes. Sin embargo, aun cuando los jóvenes desarrollen un perfil robusto de capital humano cognitivo y no cognitivo, sus resultados económicos continúan afectados por factores externos (estructurales, institucionales y territoriales) que exceden su control directo. Por ello, el fortalecimiento de las habilidades individuales debe entenderse como una condición necesaria pero no suficiente para garantizar trayectorias económicas exitosas en la ruralidad colombiana.

## **5. BARRERAS Y EVIDENCIA EMPÍRICA QUE AFECTA LOS MECANISMOS QUE RELACIONAN LA EDUCACIÓN, LA INSERCIÓN PRODUCTIVA Y LA MIGRACIÓN**

La inserción productiva de los jóvenes rurales en Colombia está condicionada por desigualdades estructurales que moldean sus trayectorias desde edades tempranas. La precariedad del acceso a la tierra, la subvaloración simbólica de lo rural frente a lo urbano, la expectativa de los ingresos urbanos (como sugiere el modelo Harris-Todaro, 1970), el debilitamiento de las autoridades locales y los procesos de transformación agraria han configurado históricamente un escenario de exclusión para las juventudes rurales en América Latina (Ortega, 1992; Muñoz Lira y Thibaut, 2022). A ello se suma una urbanización que no solo desplaza población, sino que redefine el valor del territorio, imponiendo lógicas de progreso que deslegitiman la ruralidad como espacio de realización económica y social.

El mercado laboral profundiza estas brechas. El análisis del mercado laboral del Servicio Público de Empleo (2024) muestra una clara preferencia empresarial por niveles altos de formación, con margen para absorber más profesionales, tecnólogos y técnicos. Sin embargo, en los territorios rurales estas oportunidades son escasas: las cadenas productivas suelen ser cortas y altamente concentradas en sectores primarios (agricultura, ganadería, minería) con baja tecnificación, presencia de violencia, deficiencias de infraestructura y economías locales poco diversificadas. En este contexto, los jóvenes que logran avanzar en su educación encuentran pocas opciones para aplicar sus capacidades y terminan expulsados hacia otros territorios. Este patrón se refuerza con la alta deserción educativa en el tránsito hacia la educación media, especialmente en áreas rurales donde predominan instituciones multigrado y no existe oferta de grado 9 en adelante (Galvis, 2022).

Entre julio y septiembre de 2025, la tasa de desocupación nacional fue de 8.2%, mientras que la de los jóvenes alcanzó el 14.6%; en las 13 principales áreas metropolitanas fue de 13.9%, y en diez ciudades intermedias el porcentaje de desocupación juvenil fue aún mayor (GEIH, DANE, 2025). Más del 54% del empleo juvenil se concentra en 4 actividades: comercio y reparación de vehículos (18.2%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14.3%), industrias manufactureras (11.2%) y alojamiento y servicios de comida (10,4%) (DANE, 2025). Menos del 0.7% de los jóvenes se desempeña como empleador o en cargos de liderazgo, el 57% son obreros o empleados particulares y el 32.1% trabaja por cuenta propia (DANE, 2025). Estos datos evidencian que la mayoría se inserta en posiciones de baja capacidad de decisión, alto riesgo de informalidad y limitado potencial de movilidad.

Según la OCDE (2022), la economía rural colombiana enfrenta una serie de limitantes, materializados en la informalidad y alta concentración de la tierra, informalidad laboral, fallas de información sobre los territorios y las vías, infraestructura deteriorada y transporte público precario, baja conectividad a internet, y baja calidad de los servicios públicos y gubernamentales. Esta lista significa barreras altas a la productividad y afectan directamente el “ease of doing business” o facilidad para hacer negocios (Shrivastava et al., 2021), pues impiden a una empresa rural competir, dadas sus limitaciones para la movilidad de productos, prestar servicios remotamente, o expandir su mercado.

El ERNA aparece como una vía clave para diversificar ingresos, pero su estructura actual reproduce muchos de estos límites. En América Latina, el grueso del ERNA se concentra en actividades que responden principalmente a la demanda local: comercio minorista (15-32%), servicios personales (<5%), construcción y manufactura ligera (10-30%) y transporte local (2-5%) (Köbrich y Dirven, 2007). Se trata de mercados que se saturan fácilmente y carecen de dinamismo estructural, lo que restringe su capacidad de ofrecer empleos estables y bien remunerados a los jóvenes. Por ello, los mismos autores subrayan la necesidad de impulsar iniciativas vinculadas a sectores transables y escalables como servicios digitales, turismo especializado, manufactura con valor agregado, o servicios empresariales, que son capaces de insertarse en cadenas ampliadas de valor (Köbrich y Dirven, 2007).

La expansión del ERNA está mediada por fuertes barreras de entrada: nivel educativo, acceso al crédito y disponibilidad de infraestructura física y digital (Köbrich y Dirven, 2007). Los sectores más dinámicos requieren capital humano cualificado y recursos financieros que la mayoría de los jóvenes rurales no posee, de modo que terminan concentrados en empleos informales de baja productividad, lo que la literatura denomina “ERNA de refugio”, orientado a complementar ingresos sin permitir superar la pobreza ni impulsar el desarrollo comunitario (Dirven, 2000). En paralelo, experiencias de países como Costa Rica y República Dominicana muestran que es posible desvincular parcialmente lo rural de lo estrictamente agropecuario a través de manufactura con valor agregado, servicios turísticos robustos y una administración pública descentralizada más presente en el territorio (Köbrich y Dirven, 2007), ofreciendo referentes de una ruralidad más multisectorial y resiliente.

Colombia tiene varias oportunidades en la ruralidad, como su bono demográfico, que a pesar de la baja en la natalidad, sigue teniendo una gran proporción de jóvenes, especialmente rurales; la diversidad étnica; su biodiversidad; la riqueza de recursos y la minería responsable; las cadenas de valor agrícolas; el potencial turístico y de turismo rural; y las energías renovables

y bioenergía (OECD, 2022). Algunos de estos sectores emergentes pueden ser nichos de diversificación que los jóvenes pueden aprovechar si logran superar las barreras de entrada, y para el país si sistemáticamente logra incluirlos y explotar las cadenas productivas.

El emprendimiento aparece como una estrategia relevante pero no exenta de obstáculos. Diversos estudios muestran que, cuando existen condiciones habilitantes como financiamiento, formación pertinente, y redes de apoyo, el emprendimiento permite a los jóvenes construir proyectos de vida viables sin abandonar sus territorios (Lechuga-Nevárez, 2022; Vik y McElwee, 2011). Sin embargo, en América Latina actividades como la manufactura de valor agregado, los servicios empresariales, el turismo o la tecnología siguen teniendo una presencia marginal en el empleo rural, en parte por la baja inversión en infraestructura, el acceso limitado a crédito, la escasa capacitación técnica y una cultura institucional que sigue asociando lo rural con lo agropecuario (Köbrich y Dirven, 2007).

Desde una perspectiva territorial, el emprendimiento debe entenderse como parte de un ecosistema de innovación y cooperación: los proyectos productivos más exitosos se articulan con redes comunitarias, instituciones educativas, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales que crean entornos propicios para el aprendizaje colectivo y la inclusión (Jurado Paz, 2022). La experiencia de Lechuga-Nevárez (2022) en México ilustra cómo la pandemia impulsó nuevos emprendimientos rurales en comercio digital, servicios de salud y producción de alimentos artesanales, aprovechando la tecnología para superar las limitaciones de mercado local, pero también evidencia la necesidad de acompañamiento técnico y formación en habilidades digitales para que estos procesos sean sostenibles.

En Colombia, la evidencia sugiere que las barreras para emprender son particularmente severas para la juventud rural. Castañeda et al. (2010) documentan la informalidad del mercado, la debilidad de los sistemas de apoyo institucional y la baja articulación entre formación técnica y oportunidades de negocio reales. Los autores concluyen que la experiencia del programa Jóvenes Emprendedores Rurales muestra que el acompañamiento técnico, el desarrollo de ideas de negocio viables y el arraigo territorial pueden formar capacidades emprendedoras relevantes cuando se parte de diagnósticos participativos de las necesidades productivas locales.

Los datos de ingresos y calidad del empleo muestran que el problema central no es tanto el desempleo, sino la precariedad de las ocupaciones disponibles. Leibovich et al. (2006) encuentran que, en 2005, el 66% de los ocupados rurales en Colombia ganaba menos de un salario mínimo por hora, con un 71% de ellos trabajando por cuenta propia. El 34% restante ganaba más de un salario mínimo, pero el 60% eran asalariados y el 40% cuenta propia.

Deininger y Olinto (2001) muestran que el ingreso extra predio (salarios agrícolas y no agrícolas, utilidades de empresas no agrícolas, ingresos no salariales y remesas) representa, en promedio, el 45% del ingreso del hogar rural. También encuentran una relación no lineal (en forma de U) entre la importancia del trabajo no agrícola, la dotación de recursos y el ingreso total: la especialización, agrícola o no agrícola, permite elevar el bienestar del hogar (medido por el gasto) entre un 10% y un 36%. Sin embargo, no todos los hogares pueden especializarse: imperfecciones en los mercados de crédito y tierra, falta de educación y desigualdades en la dotación de recursos constituyen barreras importantes a una mayor especialización (Deininger y Olinto, 2001).

Köbrich (2007) enfatiza que es imprescindible generar condiciones habilitantes (educación general y capacitación laboral, acceso a crédito para aspirantes a trabajo por cuenta propia o empleadores, infraestructura vial y de telecomunicaciones) para que los residentes rurales accedan a mejores oportunidades en el ERNA, especialmente en servicios. Invertir en educación y facilitar el acceso a créditos y activos productivos, entre otros mediante inversión en infraestructura pública, son condiciones necesarias para mejorar las condiciones y los retornos del empleo rural, fortaleciendo tanto a la agricultura como al ERNA al remover, al menos parcialmente, las barreras de entrada y de salida (Köbrich y Dirven, 2007).

Los jóvenes rurales no se insertan en el mercado productivo en igualdad de condiciones, sino “como pueden”, en el marco de restricciones estructurales que limitan su acceso a empleos de calidad y a emprendimientos con potencial de crecimiento. La educación emerge como un elemento decisivo en esta ecuación. Aunque incrementa la probabilidad de acceder a empleos no agrícolas y mejor remunerados (Deininger y Olinto, 2001), la baja escolaridad restringe la inserción productiva y empuja a muchos jóvenes hacia empleos de refugio o actividades agrícolas de baja exigencia en capital humano (Köbrich y Dirven, 2007). Las brechas educativas entre lo urbano y lo rural son persistentes: la población rural tiene en promedio tres años menos de educación que la urbana (OECD, 2022). Esta situación se agrava por la falta de pertinencia de la formación. El currículo rural suele reproducir patrones urbanos que no responden a las dinámicas productivas locales (Erazo-Borrás, 2022; Muñoz Lira, 2022), lo que debilita el valor percibido de la educación y contribuye al abandono escolar.

En su lugar, se requiere un enfoque formativo más colaborativo, que fortalezca competencias blandas y técnicas relevantes para actividades como turismo, agroindustria, servicios digitales o comercio local (Lechuga-Nevárez, 2022; Vik y McElwee, 2011), y que promueva arraigo, identidad productiva y sostenibilidad económica. El análisis del Servicio

Público de Empleo (2024) confirma esta preocupación al mostrar que, pese a mejoras en eficiencia de colocaciones, la oferta laboral sigue concentrándose en zonas urbanas y continúa siendo poco accesible para jóvenes con trayectorias educativas rurales.

Finalmente, el desajuste entre la oferta educativa y el mercado laboral es un rasgo estructural. La ausencia de programas relacionados con los sectores productivos del territorio (OECD, 2022) y la concentración urbana de la educación posmedia obligan a los jóvenes a migrar o a conformarse con una oferta menos pertinente y de menor calidad (Erazo-Borrás et al., 2022). A esto se suma un fuerte sesgo del presente: para muchos jóvenes rurales, el costo de oportunidad de estudiar es mayor que el de ingresar de forma temprana al mercado laboral, especialmente en actividades agrícolas (Erazo-Borrás et al., 2022). Esta tensión reduce la inversión en desarrollo de capital humano y fortalece la idea de que la movilidad social depende de la migración (Jurado Paz, 2022; Valdés, 2015).

### **5.1. Factores socioeconómicos y demográficos**

Los factores socioeconómicos y demográficos condicionan la manera en que los jóvenes rurales enfrentan las barreras del mercado laboral y las oportunidades de emprendimiento. Aunque comparten un contexto territorial marcado por carencias estructurales, no todos los jóvenes rurales se ven afectados del mismo modo; sus trayectorias dependen de elementos como el género, el capital familiar y las desigualdades socioeconómicas acumuladas. Así, el capital humano individual resulta necesario, pero no suficiente, para contrarrestar las disparidades que modelan sus opciones reales de inserción productiva.

Las diferencias de género hacen visibles patrones persistentes de desigualdad en la ruralidad. A pesar del aumento reciente en la participación femenina, los hombres continúan teniendo mayores facilidades para emprender en zonas rurales, mientras que las mujeres participan proporcionalmente más en actividades no agrícolas que en agrícolas (Acuña Romero, 2024; Dirven, 2001). Según Köbrich y Dirven (2007), estas brechas no se explican únicamente por diferencias físicas: además de trabajar con más frecuencia por cuenta propia, las mujeres tienden a concentrarse en labores administrativas, industria textil, educación y servicios personales y domésticos. Esto refleja una segmentación ocupacional arraigada en los roles de género tradicionales, que las excluyen de actividades agrícolas donde la demanda física sigue siendo alta debido al bajo nivel de mecanización, y donde el acceso a la tierra continúa privilegiando a los hijos hombres (Köbrich y Dirven, 2007).

En términos de empleabilidad, en Latinoamérica las mujeres jóvenes suelen estar más educadas que los hombres, lo que facilita su ingreso al ERNA, aunque sus salarios siguen siendo inferiores en todos los grupos etarios (Köbrich y Dirven, 2007; DANE, 2025). Para Ramírez et al. (2016), el peso del trabajo no agrícola en la participación femenina indica que estos sectores constituyen una alternativa real para superar la inactividad laboral, aunque no necesariamente aporten condiciones estables de desarrollo profesional.

El capital familiar y socioeconómico también influye decisivamente en las trayectorias laborales y emprendedoras. Tener padres con título universitario o pertenecer a estratos socioeconómicos más altos aumenta la probabilidad de emprender en la ruralidad colombiana (Arias Vargas et al., 2021). De manera complementaria, el capital cultural, específicamente los antecedentes familiares de emprendimiento, y el apoyo doméstico potencian la iniciativa empresarial, pues facilitan asumir riesgos y la búsqueda de oportunidades (Acuña Romero, 2024). Tele (2016) subraya la importancia de la cultura laboral en el hogar, ya que la exposición a modelos positivos de trabajo incentiva la búsqueda activa de empleo entre los jóvenes.

Las condiciones económicas del hogar no operan de forma lineal. Köbrich (2007) señala que los hogares más grandes tienen mayor probabilidad de generar excedentes de trabajo que pueden orientarse al ERNA como estrategia de diversificación de ingresos. No obstante, estos mismos hogares suelen ser más pobres y presentar menores niveles de educación y capital, lo que limita sus posibilidades de insertarse en actividades no agrícolas con barreras de entrada más altas. Esta paradoja sugiere que la disponibilidad de mano de obra no garantiza una inserción productiva favorable cuando los recursos materiales y educativos son insuficientes.

La desigualdad socioeconómica profundiza las diferencias internas entre los jóvenes rurales. Las brechas en desempeño académico según nivel socioeconómico son marcadas: los estudiantes de estratos más altos presentan resultados sustancialmente mejores que aquellos de estratos bajos (Galvis Restrepo, 2023). Este diferencial condiciona la acumulación de capital humano desde etapas tempranas y se traduce en menores oportunidades de acceso a formación técnica, profesional o a empleos no agrícolas de mayor productividad.

## **5.2. Factores de empleabilidad externa**

Los jóvenes rurales enfrentan barreras que exceden sus capacidades individuales y condicionan profundamente su inserción laboral. Incluso cuando cuentan con formación pertinente, las oportunidades para emplearse o emprender dependen de factores externos

ligados al territorio, a los mercados locales y a la disponibilidad de recursos productivos. En este sentido, la empleabilidad rural no puede explicarse únicamente desde las características personales de los jóvenes, sino desde un entramado de restricciones que definen y limitan el alcance de sus decisiones económicas.

Uno de los principales obstáculos es la falta de capital para iniciar emprendimientos o actividades por cuenta propia, que representan cerca del 50% del ERNA. La expansión del ERNA responde, en parte, al ingreso de nuevos trabajadores capaces de superar barreras de entrada que incluyen no solo el nivel educativo, sino el acceso a recursos financieros (Köbrich y Dirven, 2007). Sin capital inicial, ahorro, o crédito formal o informal, es difícil poner en marcha actividades no agrícolas o superar el umbral de subsistencia, pues estos emprendimientos requieren activos físicos, herramientas, insumos y habilidades específicas. La situación se agrava en los hogares rurales: solo el 36% tiene acceso a tierra y menos del 6% recibe asistencia técnica o crédito (Ramírez et al., 2016), lo que restringe tanto la producción como la diversificación económica.

Las políticas de inclusión económica también están condicionadas por las características territoriales. Según la OECD y FAO (2019), su efectividad depende de que las familias rurales estén socialmente incluidas y de que el territorio cuente con ventajas geográficas, productivas e institucionales. Las desigualdades intermunicipales son tan amplias que personas con iguales ingresos y necesidades reciben servicios públicos de distinta cantidad y calidad según su lugar de residencia. Los problemas de gestión y financiación derivan en una cobertura desigual de servicios básicos, que incide directamente en el acceso a educación, empleo y emprendimiento. De este modo, la competitividad regional depende menos de iniciativas individuales y más de las oportunidades que el territorio habilita.

La falta de financiamiento, la insuficiencia de capital humano adecuado y las dificultades para expandir actividades productivas hacia otros mercados conforman otro conjunto de barreras para los emprendimientos rurales (Acuña Romero, 2024). En ausencia de crédito y acompañamiento técnico, los jóvenes que desean emprender suelen quedar relegados a actividades de baja escala y escaso retorno, reproduciendo la dependencia del autoempleo informal.

El capital social, definido como las redes familiares, comunitarias y de apoyo, desempeña un papel determinante en la empleabilidad rural. Tele (2016) muestra que el acceso a redes amplias facilita la circulación de información laboral, mientras que los jóvenes fuera del sistema educativo o sin experiencias previas de trabajo se encuentran en círculos sociales más cerrados, lo que aumenta su vulnerabilidad. McQuaid y Lindsay (2005) subrayan que estas redes son uno

de los recursos más influyentes dentro de los factores de empleabilidad: quienes no tienen familiares, contactos o instituciones que transmitan información sobre oportunidades enfrentan mayores riesgos de exclusión. Para muchos jóvenes rurales, estas limitaciones reducen la probabilidad de encontrar empleos adecuados incluso cuando poseen habilidades relevantes.

La ubicación geográfica amplifica estas desigualdades. Tele (2016) señala que la falta de servicios como infraestructura vial, transporte, e incluso centros de intermediación laboral, limita la empleabilidad de los jóvenes rurales, quienes deben evaluar cada oportunidad laboral en función de los costos de desplazamiento. La ausencia de facilidades de conexión de oferta y demanda de empleo en zonas rurales impide que las vacantes disponibles lleguen a quienes las necesitan, mientras que la escasez de empleos formales reduce el optimismo de los jóvenes sobre su capacidad para obtener un puesto, aun cuando consideren que están preparados (Tele, 2016). Estas restricciones territoriales afectan no solo el acceso al empleo, sino también la continuidad laboral y las posibilidades de movilidad económica.

En conjunto, estos factores conforman un sistema de barreras que condiciona la empleabilidad de los jóvenes rurales. La formación, aunque fundamental, no basta por sí sola para garantizar trayectorias económicas exitosas: su impacto depende de que existan mercados inclusivos, infraestructura adecuada, crédito, servicios y ecosistemas productivos capaces de absorber y valorar el capital humano construido.

### **5.3. Diferencias entre el potencial de inserción productiva de los jóvenes urbanos y los rurales, y la heterogeneidad**

La diferencia en la inserción productiva entre jóvenes urbanos y rurales refleja brechas persistentes en acceso, calidad y retorno de la educación. Estas disparidades se traducen en trayectorias económicas divergentes, donde los jóvenes rurales parten con desventajas estructurales que limitan su capacidad de transformar la educación en movilidad social. Cerca del 70% de los niños y jóvenes sin educación en Colombia viven en zonas rurales (OECD, 2022), lo que a la luz de la economía del desarrollo humano, explica de las desigualdades acumuladas. Según la OCDE (2022), en promedio, la población rural tiene tres años menos de escolaridad que la urbana y solo el 5.1% de los mayores de 17 años alcanza la educación superior. A ello se suma un abandono educativo significativamente más alto: el 45% de los jóvenes rurales entre 18 y 22 años no completa la educación media (9 a 11), frente al 27% en las zonas urbanas, y solo dos de cada diez egresados rurales acceden a la educación terciaria (Díaz Baca et al., 2024).

Estas brechas cuantitativas están asociadas a diferencias marcadas en acceso y continuidad educativa. En áreas urbanas, la duración promedio de estudio es de 9.2 años, mientras que en zonas rurales es de apenas 5.5 años (Díaz Baca et al., 2024). Este rezago se profundiza en la transición a niveles superiores, donde los jóvenes rurales enfrentan limitaciones de infraestructura, recursos y oferta académica. La baja disponibilidad de instituciones educativas, la distancia a los centros urbanos y los costos ocultos del desplazamiento moldean decisiones que, en muchos casos, priorizan la salida temprana del sistema educativo.

Las desigualdades también se manifiestan en la calidad de la educación disponible. Los territorios urbanos concentran la mayor proporción de docentes con posgrado y presentan niveles educativos más altos en la población general (Galvis Restrepo, 2023). En contraste, las escuelas rurales operan con infraestructura limitada, menor disponibilidad de personal docente y menores niveles de cualificación (Erazo Borrás, 2022). Modelos como Escuela Nueva funcionan en contextos donde un solo docente atiende múltiples grados en un único salón, lo que restringe la atención pedagógica individualizada. Estas condiciones repercuten en los resultados académicos: los estudiantes rurales obtienen desempeños inferiores a los de sus pares urbanos en pruebas estandarizadas, una diferencia que también se ve y se amplía según el nivel socioeconómico (Galvis Restrepo, 2023).

Más allá de las condiciones objetivas de acceso y calidad, existe una diferencia profunda en la percepción del valor y el retorno de la inversión en educación. White (2012) observa que muchos jóvenes rurales conciben la educación como un mecanismo para abandonar el campo, más que como una herramienta para transformar su territorio. Esta tensión entre movilidad social y permanencia territorial cuestiona los modelos pedagógicos tradicionales y los referentes de éxito profesional, configurados más por la idea de “salir” que por la de construir economías rurales dinámicas.

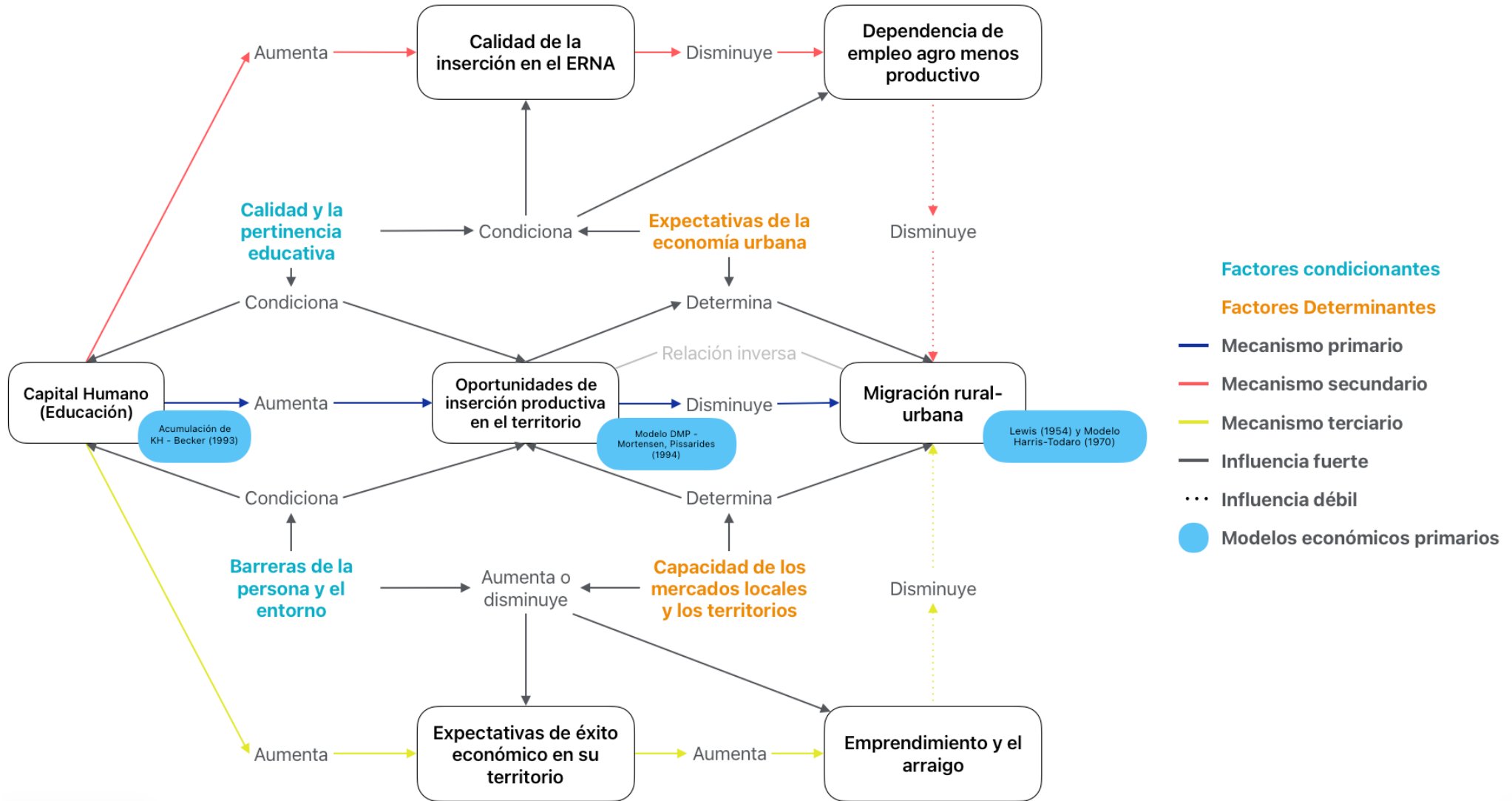
A este elemento se suma lo que Erazo Borrás (2022) denomina “sesgo del presente”: los jóvenes rurales tienden a priorizar actividades con beneficios inmediatos como el trabajo agrícola, sobre inversiones educativas de largo plazo. Su participación temprana en labores productivas, basada en habilidades adquiridas desde la niñez, refuerza la percepción de que el trabajo es más relevante que la escuela, elevando el costo de oportunidad de continuar estudiando. En contraste con jóvenes urbanos en riesgo de exclusión, que suelen ver la educación como un medio directo para alcanzar estabilidad económica y personal, los jóvenes rurales pueden percibirla como un requisito poco útil para su realización económica (Erazo Borrás, 2022).

La literatura económica sobre la complementariedad dinámica en la formación de habilidades sostiene que las inversiones educativas más rentables se realizan en etapas tempranas y sobre estudiantes con bases sólidas. Dado el rezago acumulado que enfrentan muchos jóvenes rurales, las mujeres, y los grupos diferenciados, las inversiones tardías resultan menos productivas, lo que reduce el retorno privado de la educación y profundiza las brechas iniciales.

Las diferencias también se extienden al contexto de inserción productiva mediante empleo o emprendimiento. Los sectores rurales no agropecuarios más productivos requieren altos niveles de capital humano, lo que puede atraer trabajadores urbanos cualificados en lugar de beneficiar a jóvenes rurales con menor escolaridad (Köbrich y Dirven, 2007). Incluso quienes logran mayores niveles educativos manifiestan con frecuencia proyectos de vida orientados a la desruralización y desagrarización, buscando estudios y empleos en ciudades cercanas o capitales (Valdés, 2015). En estos casos, el capital humano funciona como un motor de migración hacia entornos con mejores oportunidades (Tele, 2016).

Estas dinámicas se ven reforzadas por las ventajas estructurales de las áreas urbanas: proximidad, densidad, mercados de capital más sofisticados e instituciones de investigación (OECD, 2022). Tales condiciones aumentan el retorno económico de la educación urbana y profundizan la brecha respecto del contexto rural, donde las oportunidades para monetizar el capital humano son más limitadas. Así la literatura pareciera evidenciar que los jóvenes rurales enfrentan un conjunto acumulativo de barreras en acceso, calidad y rentabilidad de la educación que limita su inserción productiva y reduce la probabilidad de alcanzar niveles de bienestar similares a los de sus pares urbanos.

### 6. MAPA RELACIONAL DE TEORÍA ECONÓMICA, EVIDENCIA EMPÍRICA Y LOS MECANISMOS



## 7. CONCLUSIONES

En este documento se examinó la relación entre educación, inserción productiva y migración de los jóvenes rurales a partir de una revisión de literatura económica. El documento partió de referentes teóricos de la economía laboral y del desarrollo para interpretar el funcionamiento de los mercados laborales rurales, las fricciones que los caracterizan y las decisiones de movilidad asociadas a desigualdades persistentes entre territorios urbanos y rurales. Posteriormente, se presentó una caracterización de la economía rural colombiana que permitió contextualizar las condiciones productivas, laborales e institucionales en las que se insertan los jóvenes. Sobre esta base, se revisó evidencia empírica para América Latina y Colombia con el fin de sistematizar los vínculos observados entre educación, trayectorias de inserción productiva y migración juvenil rural.

La literatura muestra que la educación influye en las trayectorias laborales de los jóvenes rurales a través de mecanismos diferenciables, cuya intensidad depende tanto de las condiciones estructurales del territorio como de la calidad y pertinencia de las instituciones educativas. Aunque para Colombia no existe evidencia causal concluyente, sí se identifican regularidades empíricas y mecanismos teóricos que permiten comprender cómo la educación puede contribuir, bajo ciertas condiciones, a la inserción productiva juvenil, y cómo su ausencia o baja pertinencia se asocia con una mayor propensión a migrar. En este sentido, los estudios con respaldo empírico coinciden en que la educación incrementa la probabilidad de acceder a empleos rurales no agrícolas mejor remunerados, reduce la dependencia del empleo agrícola de baja productividad y amplía las posibilidades de emprendimiento juvenil cuando se combina con formación técnica pertinente y acompañamiento.

La evidencia empírica disponible sugiere que estos mecanismos operan de manera condicionada. El acceso a empleos no agrícolas y a sectores con mayores retornos depende de la existencia de mercados laborales locales diversificados, lo que subraya la interacción entre capacidades individuales y estructura económica territorial. De manera similar, los programas de formación orientados al emprendimiento documentan la posibilidad de desarrollar negocios viables y de mayor valor agregado, aunque sin constituir pruebas causales generalizables. En conjunto, estos hallazgos indican que la educación puede mejorar la inserción productiva juvenil, siempre que existan condiciones locales capaces de absorber las competencias adquiridas.

Más allá de los estudios con evidencia empírica directa, la literatura descriptiva y cualitativa propone otros mecanismos coherentes con los análisis previos, pero que requieren mayor validación. Entre ellos se encuentran la mejora de las expectativas económicas y la disposición a permanecer en el territorio, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y de agencia personal, y el potencial de la pertinencia curricular para reforzar el arraigo. Estos mecanismos se apoyan en la percepción de oportunidades locales y en la alineación entre formación y vocaciones productivas del territorio, pero hasta el momento no han sido evaluados de manera sistemática para jóvenes rurales colombianos.

La relación entre educación y migración emerge en la literatura como indirecta y altamente dependiente del contexto territorial. La educación no reduce automáticamente la migración y, en ausencia de oportunidades locales, puede incluso incrementarla al facilitar la búsqueda de mercados que remuneren mejor el capital humano. En contraste, cuando la educación se articula con ecosistemas productivos locales, puede ofrecer alternativas económicas viables que reduzcan la necesidad de migrar. En este marco, la interacción entre mercados laborales rurales, infraestructura, acceso a crédito y calidad educativa resulta determinante para que la educación funcione como un mecanismo de permanencia o de salida.

La estructura económica rural impone límites claros al funcionamiento de los mecanismos educativos. La evidencia señala que la informalidad, la baja productividad, la escasez de empleo formal, la concentración de la tierra, el rezago en infraestructura y la baja tecnificación restringen la capacidad de la educación para traducirse en inserción productiva. En territorios donde el ERNA es precario o está saturado, la educación tiende a operar menos como habilitador económico local y más como un puente hacia la migración, especialmente para jóvenes con mayores niveles de escolaridad, reforzando la idea de que mejorar la educación es necesario, pero no suficiente, para transformar las trayectorias laborales juveniles en contextos rurales.

Finalmente, se identifica que la educación se asocia con la inserción productiva y la migración juvenil rural a través de patrones que apuntan a la existencia de mecanismos interrelacionados, más que a efectos directos o universales. En primer lugar, la evidencia revisada muestra que la educación tiende a ampliar las capacidades productivas de los jóvenes y a asociarse con mayores posibilidades de inserción laboral o emprendedora cuando existen oportunidades económicas locales compatibles con dichas capacidades. En segundo lugar, en contextos donde estas oportunidades son limitadas, la literatura identifica que la educación suele asociarse con una mayor propensión a migrar, en la medida en que amplía las expectativas y el conjunto de alternativas percibidas. Finalmente, de manera consistente en los estudios

analizados, la inserción productiva emerge como un mecanismo intermedio clave que condiciona la relación entre educación y migración, sugiriendo que la capacidad de los territorios para absorber el capital humano disponible resulta relevante para interpretar las trayectorias juveniles rurales observadas.

Esta revisión se enfrentó a diversos limitantes, como la escasa teorización específica sobre el empleo juvenil rural. Aunque existen marcos consolidados sobre mercados laborales rurales y migración, son limitados los trabajos que abordan de manera directa las características, desafíos y oportunidades propias de la juventud rural, así como la heterogeneidad y los efectos distributivos asociados a diferencias en educación, habilidades, redes sociales, acceso a activos, territorio y género, este último particularmente ausente en muchos modelos pese a la evidencia de brechas significativas. Ante estos, resulta relevante desarrollar modelos específicos del empleo juvenil rural incorporando la heterogeneidad de los jóvenes, así como analizar cómo la educación interactúa con las fricciones de los mercados laborales rurales y con la segmentación interna del ERNA. También, abre oportunidad a gerentes de programas y formuladores de política para desarrollar estudios empíricos con diseños causales que permitan estimar de manera más precisa los efectos de la educación sobre la inserción productiva, los ingresos y la migración, aprovechando variaciones institucionales, territoriales o programáticas. Finalmente, se identifican oportunidades para investigar la articulación entre educación y políticas productivas territoriales, así como las brechas de género y otros factores contextuales que condicionan el aprovechamiento del capital humano por parte de la juventud rural.

## 8. REFERENCIAS

Acuña Romero, Y. M. (2024). Emprendimiento empresarial en los estudiantes universitarios del Perú: Estudio de revisión. *Revista de Climatología*, 24, 178-186. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.178-186>

Arias Vargas, F. J., Ribes-Giner, G., Arango-Botero, D., & Garcés Giraldo, L. F. (2021). Factores sociodemográficos que inciden en el emprendimiento rural de jóvenes en Antioquia, Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(96), 1218-1240. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.96.14>

Bauer, Thomas K., and Klaus F. Zimmermann. 1998. Causes of international migration: A survey. In *Crossing Borders: Regional and Urban Perspectives on International Migration*. Edited by Cees Gorter, Peter Nijkamp and Jacques Poot. Aldershot: Ashgate, pp. 95–127.

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.  
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>

Bhattacharya, P. C. (1993). Rural-urban migration in economic development. *Journal of Economic Surveys*, 7(3), 243-281. <https://doi.org/10.1111/J.1467-6419.1993.TB00167.X>

Bonilla Mejía, L., Barón, J. D., & Galvis Aponte, L. A. (2014). Educación y desarrollo regional en Colombia (A. Sánchez Jabba & A. Otero-Cortés, Eds.). Banco de la República.

Castañeda, C., González, J., & Rojas, N. (2010). Evaluación de impacto del programa Jóvenes Rurales del SENA. Fedesarrollo, Working Paper 53.

Castelli, F. (2018). Drivers of migration: why do people move? *J. Travel Med.* 25, 1-7. doi: 10.1093/jtm/tay040

Chaudhuri, S., Mukhopadhyay, U., & Okiemy, M. (2024). Heterogeneous firms, heterogeneous labourers, rural-urban migration and the effect of change in cost of migration. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4414049/v1>

Christiaensen, L., & Martin, W. (2018). Agriculture, structural transformation and poverty reduction: Eight new insights. *World Development*, 109, 413-416.  
<https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2018.05.027>

DANE. (2020). Proyecciones y retroproyecciones de población nacional para el periodo 1950-2017 y 2018-2070 con base en el CNPV 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

DANE. (2025). Demografía rural en Colombia. Informes de estadística sociodemográfica aplicada. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticas-sociodemograficas/Demografia-Rural-Colombia-2025.pdf>

DANE. (2025). Mercado laboral de la juventud, trimestre julio - septiembre 2025. Boletín técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2025 -GEIH. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLJ-jul-sep2025.pdf>

De Haas, H. (2010). Migration and Development: A Theoretical Perspective. *International Migration Review*, 44(1), 227–264. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x>

Deininger, K., & Olinto, P. (2001). Rural Nonfarm Employment and Income Diversification in Colombia. *World Development*, 29(3), 455-465. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00106-](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00106-6)

Díaz Baca, M. F., Moreno Lerma, L., Burkart, S., & Triana Ángel, N. (2024). Why do rural youth migrate? Evidence from Colombia and Guatemala. *Frontiers in Sociology*, 9, 1439256. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1439256>

Dirven, M. (2000), "Empleo rural, grupos etarios y género". Presentación en el Seminario Ocupaciones rurales no agrícolas. Londrina, Brasil, octubre.

Elango, S., Garcia, J. L., Heckman, J. J., & Hojman, A. (2015). Early Childhood Education. Means-Tested Transfer Programs in the United States, II.

Erazo-borrás, C. Y., Ceballos-Mora, A. K., & Matabanchoy-Salazar, J. M. (2025). Mirada ecológica en la construcción del proyecto de vida de jóvenes rurales. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 20(1), 1-25. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.1.5255>

Fields, G. S. (1975). Rural-urban migration, urban unemployment and underemployment, and job-search activity in LDCs. *Journal of Development Economics*, 2(2), 165-187.

Fundación Interra. (2023). Análisis de demanda de la educación posmedia en la ruralidad para Fundación Bancolombia y Fundación Aurelio Llano Posada. Documento interno.

Fundación Interra. (2023). Análisis de la oferta de formación posmedia en Colombia para Fundación Bancolombia y Fundación Aurelio Llano Posada. Documento interno.

Galvis Restrepo, M. (2023). El estado de la educación en Antioquia 2018-2021, un análisis cuantitativo para los 125 municipios del departamento. Proantioquia. [https://proantioquiaserver2.com/system/files/2023-11/docuprivados/El%20Estado%20de%20la%20Educacio%CC%81n%20en%20Antioquia%202018-2021\\_BAJA.pdf](https://proantioquiaserver2.com/system/files/2023-11/docuprivados/El%20Estado%20de%20la%20Educacio%CC%81n%20en%20Antioquia%202018-2021_BAJA.pdf)

García, V., Masferrer, C., and Giorguli, S. (2019). Cambios futuros en la estructura etaria y diferentes escenarios migratorios. El caso de América del Norte y Central. *Rev. Latinoam. Pobl.* 13, 36-53. doi: 10.31406/relap2019.v13.i2.n25.2

Gheasi, M., & Nijkamp, P. (2017). A Brief Overview of International Migration Motives and Impacts, with Specific Reference to FDI. *Economies*, 5(3), 31. <https://doi.org/10.3390/economies5030031>

Grupo Banco Mundial. (2025). Datos y series cronológicas de los indicadores del desarrollo mundial - Colombia. <https://datos.bancomundial.org/pais/colombia>

Harris, John R., and Michael P. Todaro. 1970. Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *American Economic Review* 60: 126–42.

Heckman, J. J. (2008). Schools, Skills, and Synapses. Discussion Paper, No 3515. [https://heckmanequation.org/wpcontent/uploads/2017/01/Schools\\_Skills\\_Synapsis.pdf](https://heckmanequation.org/wpcontent/uploads/2017/01/Schools_Skills_Synapsis.pdf)

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. University of Chicago. [https://heckmanequation.org/wp-content/uploads/2017/01/Econ-of-Hum-Dev-and-Soc-Mob\\_2014-05-20a\\_akc.pdf](https://heckmanequation.org/wp-content/uploads/2017/01/Econ-of-Hum-Dev-and-Soc-Mob_2014-05-20a_akc.pdf)

Herrendorf, B., & Schoellman, T. (2018). Wages, human capital, and barriers to structural transformation. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 10(2), 1-23. <https://doi.org/10.1257/MAC.20160236>

International Organization for Migration (2021). Perfil Migratorio de Colombia 2021. Colombia. <https://publications.iom.int/books/perfil-migratorio-de-colombia-2021>

Jurado Paz, I. M. (2022). Emprendimiento rural como estrategia de desarrollo territorial: Una revisión documental. *Revista de Investigación en Desarrollo Regional. ECONÓMICAS CUC*, 43(1). <https://doi.org/10.17981/econcuc.43.1.2022.Org.7>

Köbrich, C., & Dirven, M. (Eds.). (2007). Características del empleo rural no agrícola en América Latina con énfasis en los servicios. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, Div. de Desarrollo Productivo y Empresarial.

Lechuga-Nevárez, M. D. R. (2022). Emprendimiento rural en la nueva ruralidad ante la nueva normalidad en el municipio de Nombre de Dios en Durango, México. *Journal of Business Development Strategies*, 8, 1-18. <https://doi.org/10.35429/JBDS.2022.22.8.1.18>.

Leibovich, J., Nigrinis, M., Ramos, M. (2006). Caracterización del mercado laboral rural en Colombia. *Revista del Banco de la República*; Vol. 79, Núm. 947 (2006): *Revista del Banco de la República* - septiembre 2006; 15-76

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *Manchester School of Economics and Social Studies*, 20, 139-192.

López, É. P., Martínez, L. M., Martínez-Cañas, C. A., & Vargas-Prieto, A. (2018). Desarrollo rural y envejecimiento: Caso de estudio municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 8(2), 193-206. <https://doi.org/10.19053/20278306.v8.n2.2018.7959>

Mazumdar, D. (1975) The theory of urban unemployment in less developed countries, *World Bank Staff Working Paper*, No. 198.

McQuaid, R. W., & Lindsay, C. (2005). The concept of employability. *Urban Studies*, 42(2), 197-219. <https://doi.org/10.1080/0042098042000316100>.

Ministerio de Agricultura. (2019). Un Campo para la equidad. Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2018-2022.

Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1994). Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment. *The Review of Economic Studies*, 61(3), 397-415. <https://doi.org/10.2307/2297896>

Muñoz Lira, N., & Thibaut, P. (2022). Articulación patrimonio-escuela-comunidad: Una aproximación cartográfica desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner para el aprendizaje situado rural. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 48(4), 225-246. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052022000400225>

OECD (2022), Rural Policy Review of Colombia 2022, OECD Rural Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c26abeb4-en>.

OECD and FAO (2019). Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2019-2028. Enfoque Especial: América Latina. <https://n9.cl/m1jg9>.

Okiemy, M., & Nkouna, G. (2021). Employment access and job search channels for young people in Congo. *Theoretical Economics Letters*, 11(2), 305-323. <https://doi.org/10.4236/TEL.2021.112021>

Ortega, E. (1992). La trayectoria rural de América Latina y el Caribe. *Revista de la CEPAL*, 1992(47), 125-148. <https://doi.org/10.18356/142a33af-es>.

Porzio, T., Rossi, F., & Santangelo, G. (2021). The human side of structural transformation. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.3386/W29390>

Prieto Curiel, R., Quiñones Domínguez, M., Lora, E., & O'Clery, N. (2022). Mobility between Colombian cities is predominantly repeat and return migration. *Computers, Environment and Urban Systems*, 94, 101774. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2022.101774>

Ramírez, J. M., Angulo, R., Castañeda, A., Cavalli, G., Vargas, C., Beltrán, C. A., & Satizábal, S. (2016). Modelo de gestión para la superación de la pobreza rural en las zonas priorizadas para el posconflicto. Fedesarrollo.

Rosendo-Chávez, A., Herrera-Tapia, F., Vizcarra-Bordi, I., & Baca-Tavira, N. (2018). Desarrollo territorial rural: Agricultura y migración en el sur del Estado de México. *Economía Sociedad y Territorio*, 1243-1274. <https://doi.org/10.22136/est20191207>

Santibáñez, J., Palma C., S. I., Ramírez Reyes, H., Hidalgo, N., & Urban, A.-M. (2017). Estudio cualitativo sobre mujeres jóvenes y la violencia en Centroamérica: Efecto en condiciones de salida y retorno de menores migrantes. *Inter-American Development Bank*. <https://doi.org/10.18235/0000630>

Santos, M. E., Villatoro, P., Mancero, X. and Gerstenfeld, P. (2015). "A Multidimensional Poverty Index for Latin America". OPHI Working Paper 79, Oxford University.

Saravia, F., Letelier, F., & Micheletti, S. (2018). Ni urbanos, ni rurales: Cambios intergeneracionales en adscripción territorial subjetiva en la región del Maule, Chile. *Cuaderno Urbano*, 24(24). <https://doi.org/10.30972/crn.24242920>.

Servicio Público de Empleo. (2024). Análisis del mercado laboral 2021-2024.

Shrivastava, U., Ofstein, L., & Golhar, D. (2021). Direct and Indirect Effects of ICT Infrastructure, Skills, and Use on Entrepreneurship: A Cross-Country Empirical Investigation. *Journal of Global Information Management*, 29(6), 1-25. <https://doi.org/10.4018/JGIM.20211101.0a48>

Stark, Oded. 1991. *The Migration of Labor*. Cambridge: Basil Blackwell Ltd.

Stark, Oded, and David E. Bloom. 1985. The new economics of labor migration. *The American Economic Review* 75: 173–78.

Tele, A. (2016). Exploring the perceptions of Rural Youth not in Education, Employment or Training (NEET) on factors that influence their Employability.

Thiede, B., Gray, C., & Mueller, V. (2016). Climate variability and inter-provincial migration in South America, 1970-2011. *Global Environmental Change*, 41, 228-240. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.10.005>

Valdés S, X., & Rebolledo G, L. (2015). Géneros, generaciones y lugares: Cambios en el medio rural de Chile Central. *Polis (Santiago)*, 14(42), 491-513. <https://doi.org/10.4067/S0718-65682015000300022>

Vik, J., & McElwee, G. (2011). Diversification and the Entrepreneurial Motivations of Farmers in Norway. *Journal of Small Business Management*, 49(3), 390-410. <https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2011.00326.x>.

Walker, S. P., Chang, S. M., Wright, A. S., Pinto, R., Heckman, J. J., & Grantham-McGregor, S. M. (2022). Cognitive, psychosocial, and behaviour gains at age 31 years from the Jamaica early childhood stimulation trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(6), 626-635. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13499>

White, B. (2012). Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9-19. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2012.00375.x>.

Zabala, A. (2021). A literature review of rural youth studies in Latin America and the Caribbean during 2001-2019. *Cien. Tecnol. Agropec.* 22, 1-25. doi: 10.21930/rcta.vol22\_num3\_art:2310

***Normatividad revisada***

Congreso de Colombia. (1990). Ley 16 de 1990.

Congreso de Colombia. (1994). Ley 160 de 1994.

Congreso de Colombia. (1996). Ley 302 de 1996.

Congreso de Colombia. (2002). Ley 731 de 2002.

Congreso de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011.

Congreso de Colombia. (2014). Ley 1731 de 2014.

Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 de 2017.

Congreso de Colombia. (2018). Ley 1885 de 2018.

Congreso de Colombia. (2020). Ley 2046 de 2020.

Congreso de Colombia. (2023). Ley 2294 de 2023.

Congreso de Colombia. (2025). Ley 2462 de 2025.

Congreso de Colombia. (2025). Ley 2539 de 2025.

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3951.

Departamento Nacional de Planeación. (2021). CONPES 4051.

Presidencia de la República. (2011). Decreto 4800 de 2011.

Presidencia de la República. (2017). Decreto Ley 892 de 2017.

Presidencia de la República. (2017). Decreto Ley 902 de 2017.